

**Usted ha recibido una notificación en su casillero electrónico del proceso
número 07308202000255**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
FUNCIÓN JUDICIAL**

Juicio No: 07308202000255, PRIMERA INSTANCIA, número de ingreso 1

Casillero Judicial No: 42

Casillero Judicial Electrónico No: 0704764448

Fecha de Notificación: 02 de diciembre de 2020

A: MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SECRETARIO DE AGUA / PAULO ARTURO
PROAÑO ANDRADE

Dr / Ab: FLOR MARIA ARMIJOS FEJOO

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN PIÑAS

En el Juicio No. 07308202000255, hay lo siguiente:

Piñas, miércoles 2 de diciembre del 2020, las 11h10, : SENTENCIA. - PRIMERO: MENCIÓN DEL JUZGADOR QUE LA PRONUNCIA. - Abg. Mgtr. Doctorando Jonathan Rodríguez Córdova, en mi calidad de Juez Titular de la Unidad Judicial Multicompetente, con Sede en el cantón Piñas, de conformidad a la Resolución No. 254-2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura, y con fundamento en la potestad de administrar justicia, contemplada en el artículo 167 de la Constitución de la República del Ecuador, en relación al Art. 245 del Código Orgánico de la Función Judicial, UNA VEZ QUE EL SUSCRITO HA RETORNADO DE SUS VACACIONES OBLIGATORIAS asumo conocimiento del JUICIO CONSTITUCIONAL No 07308-2020-00255, de ACCIÓN DE PROTECCIÓN, he venido sustanciando el presente proceso, en mi calidad de juez constitucional y acorde a las reglas contempladas en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en adelante LOGJC., al respecto de conformidad a lo que señala el Art. 14 ibídem; y encontrándose la causa en estado de emitir la resolución debidamente motivada, en forma escrita, como lo regla el Art. 17 de la norma procesal constitucional, se considera lo siguiente: SEGUNDO: A) COMPETENCIA.- El suscrito Juez es el competente para conocer y resolver la presente acción constitucional de protección de derechos fundamentales, de acuerdo a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución de la República en concordancia con el artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- B) VALIDEZ DEL PROCESO.- En la tramitación de esta causa, se ha observado la Normativa Constitucional que establecen los Arts. 76, 86, 87 y 88, al igual que las reglas de procedimiento establecidas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, vigente, además no existe omisión de solemnidad sustancial, que influyan en la decisión de esta causa; por lo que se declara la validez del proceso. TERCERO: ANTECEDENTES.- IDENTIDAD DE INTERVINIENTES.- La Demanda Constitucional de Acción de Protección es presentada por: 1) En representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras: Liliana Maribel Ramírez Sánchez, titular de la cédula de ciudadanía signada con el número 0707008405, de estado civil casada, de veinte y siete años (joven-grupo de atención prioritaria), comerciante, ecuatoriana, domiciliada en el cantón Piñas, y presidenta de la comunidad “La Mesa” a la que representa en esta causa conforme el artículo 86 de la Constitución de Montecristi; 2) en representación de quienes integran la comunidad “Portete”: Rosa Magaly Aguilar Ayala, titular de la cédula de

la ciudadanía signada con el número 0702707357, mayor de edad, de estado civil casada, comerciante, ecuatoriana, domiciliada en la comunidad “Portete”, parroquia Piñas del Cantón Piñas en la provincia de El Oro, y presidenta de la comunidad “Portete” a la que representa en esta causa conforme el artículo 86 de la Constitución de Montecristi; 3) en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas: Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, titular de la cédula de ciudadanía signada con el número 0102131380, de cuarenta y nueve años, Ingeniero, casado, ecuatoriano, domiciliado en el cantón Piñas. Proponiendo el proceso de garantías jurisdiccionales de los derechos, en contra de: 1) Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Piñas, legalmente representado por el señor alcalde, Jaime Wilson Granda Romero mismo que ejercerá la representación con el procurador sindico del GAD Municipal de Piñas, conforme lo ordena el artículo 60 literal (a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización. 2) Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia del Oro, en la persona de su representante legal, Clemente Bravo Riofrío conforme el artículo 50 del COOTAD, para lo cual, se deberá contar con el procurador sindico de este GAD. 3) Administración pública central, determinada en el Ministerio del Ambiente y Agua, cuya autoridad está representada por el señor PAULO ARTURO PROAÑO ANDRADE Ministro del Ambiente y Secretario del Agua (E), 4) para lo cual, atento a lo prescrito en el artículo 235 y 237 de la Constitución de 2008 se contará con la Procuraduría General del Estado. Al MAE, se le citará en la ciudad de Machala, Dirección: Calles Vela entre 25 de Junio y Sucre; así como también en contra del Procurador General del Estado. DE LA DEMANDA. - Lo accionantes, Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, proponen su demanda de acción constitucional y señalan que: a. El Ecuador ha sido calificado internacionalmente como uno de los pocos países megadiversos (en Sudamérica: Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador) es decir, con variedad de especies de distintos grupos taxonómicos como plantas angiospermas, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, mariposas y otros. Somos tan megadiversos que “en plantas y mamíferos, por ejemplo, tenemos casi doce y veinte veces más especies que Brasil, respectivamente, por unidad de superficie”, y reconocimos por primera vez en el constitucionalismo mundial a la naturaleza como sujeto de derechos en la Constitución de 2008, por nuestra preocupación por el abuso e indiscriminado daño que se hace a la naturaleza y sus ecosistemas. b. Lo propio ocurre con el cantón Piñas o también llamada la Orquídea de los Andes, que se encuentra en la zona alta de la provincia de El Oro en las estribaciones occidentales de la Cordillera de Los Andes, en la hoya de Zaruma, a una altura de 1014 m.s.n.m. La temperatura promedio es de 21,7 °C, la temperatura máxima se registra en noviembre con 32 °C y la temperatura mínima corresponde al mes de agosto con 16.3 °C. Humedad relativa la máxima alcanza el 100%, la mínima un 43%, para un valor medio de 71,5%. Las principales cuencas hidrográficas del cantón son: río Piñas y río Moromoro, tributarios de la red hídrica de la cuenca alta del Puyango Tumbes; río Naranjos, tributario de la red hídrica del río Arenillas que sirve como fuente de abastecimiento en el embalse Tahuín; además como límites geográficos intercantonales e interprovinciales tiene a los ríos Calera, Amarillo y Pindo. Posee algunos manantiales, entre los principales se puede anotar a: La Arada, Piñas Grande, Loma Larga, Las Chontas, Matalanga, Granada. Las cuencas de abastecimiento de agua potable son las quebradas La Chiral, las Chontas, el Palmal, Honda y fuentes complementarias, las mismas que tienen un caudal promedio de 80 litros por segundo, de los cuales, 67 litros por segundo son captados para su tratamiento. En cuanto a la flora, “el cantón posee varios pisos altitudinales y cuatro formaciones vegetales por lo que área posee especies propias del bosque seco y del bosque húmedo. Sobre los 1.000 m, en el bosque húmedo, es

especialmente rica en especies de orquídeas de las cuales hay 13 endémicas y begonias. La especie *Begonia ludwigii* que se encuentra bajo la categoría Amenazada conocida sólo para la localidad de Huigra hasta el año 1940, ha sido encontrada en Buenaventura”, estas especies se encuentra protegidas por el libro rojo de especies endémicas de Ecuador. En cuanto a la fauna, se ha identificado en el plan de ordenamiento territorial del cantón Piñas, la gran importancia de la riqueza biológica, con diferentes especies: 9 anfibios, 15 reptiles, 330 aves, 22 mamíferos y otros de gran importancia que también se encuentran bajo protección por el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Se debe recalcar, que por la gran diversidad de especies que viven en el territorio del cantón Piñas, se han tomado decisiones importantes consientes de los problemas que se tienen, en especial protegiendo a estas especies, para lo que se reconocen la Finca de Conservación Rivera de Los vencejos (con tres cascadas); Reserva Ecológica Buenaventura (cascada Las Bateas) y otros. Así mismo, en el plan de ordenamiento territorial del cantón Piñas (2015) se han establecido un conjunto de amenazas, peligros, riesgos que están conectados por las condiciones físicas en donde está asentado el cantón, pero así mismo, la falta de cautela en la realización de actividades antrópicas como la minería. En este cantón: “de acuerdo a la información del catastro minero, que se entregó por parte de la Agencia de Regulación y Control Minero, existen 48 concesiones mineras, muchas de éstas son compartidas con los cantones vecinos de: Chaguarpamba, Portovelo, Zaruma, Atahualpa y Santa Rosa, suman un total de 21619,25 hectáreas de concesiones entre materiales de construcción, metálicos y metálicos- no metálicos”. c. Dentro del Piñas megadiverso, se encuentra el cerro identificado como “La Chuva” de gran extensión (más de 50 hectáreas), lo que hace de este sujeto de derechos sea hábitat u “OIKOS”-CASA y en donde cumplen funciones diferentes seres tanto a-bióticos (suelo, aire y agua), bióticos (flora, fauna), así como comunidades de seres humanos, conformando diferentes ecosistemas. En el cerro, se ha podido apreciar que realizan su vida diversos mamíferos, reptiles, gran número de aves y otros seres que comparten su vida con las comunidades o sitios “Piedra Blanca”, “La Chuva”, “El Portete”, “El Guayabal” y “La Mesa”. “La Chuva” brinda un conjunto de servicios ambientales para los seres humanos permitiendo tener acceso al agua; que se realicen actividades de agricultura (alimentación) y, su suelo permite que los seres humanos se asienten en sus faldas, un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza, conforme usted podrá verificar en la inspección. d. Sin embargo, desde hace aproximadamente setenta años (ver mapa de Google 1969) conforme la narración de las personas más antiguas de la comunidad y de Piñas en general, en el cerro “La Chuva” se viene realizando actividades de extracción y transporte de recursos naturales no renovables como es el lastre (explotación) y otros, en diferentes puntos (cerca de la comunidad “La Mesa”, PSAD 56, coordenadas X 649710; coordenadas Y 9590573; WGS84: coordenadas X 649451, coordenadas Y 9590199, identificada por la ARCOM como cantera 1 y será tratada en delante de esa forma; lo mismo ocurrió PSAD 56: coordenadas X 649739; coordenadas Y 95901581; WGS84: coordenadas X 649480, coordenadas Y 9589784, identificada por la ARCOM como cantera 2 y será tratada en delante de esa forma) afectando la vida de diferentes sujetos de derechos que cumplimos nuestras funciones vitales y somos el cerro. Lo impresionante, Juez/a, es que, hace aproximadamente quince años la explotación de este recurso no renovable se aceleró en forma abrupta, destruyendo gravemente parte del cerro. Para realizar esta actividad de alto riesgo, calificada como minería a cielo abierto y de uso intensivo, en donde se han extraído grandes capas de tierra, piedras, realizándose perforaciones profundas con retroexcavadoras, actividades que generan mucho ruido y levanta polvo en grandes cantidades, se destruyó la zona forestal (quema y corte de árboles) y el hábitat de especies que viven en el cerro. Algo similar ocurre en el transporte del recurso extraído, para lo cual se utiliza maquinaria con gran capacidad de carga como volquetas, plataformas y otros que al salir de la cantera 1 y 2 (que también es el camino de acceso a la comunidad “La Mesa”), (i) hacen un ruido insoportable, por el funcionamiento de las máquinas; (ii) dejan polvillo y material

particulado disperso en el aire, producido por la explotación; (iii) generan afecciones a la salud, en especial tos, ojos irritados y molestias en sus oídos. Así mismo, se hace énfasis, que, en la extracción antitécnica de material, los operadores de maquinaria desde la parte más alta (25 metros o más) de las canteras 1 y 2 (cerro La Chuva) arrojan material para que sea más arenoso, levantando grandes cantidades de polvo, causando gran ruido y en algunas veces las piedras arrojadas llegan a espacios públicos como la carretera de acceso a la comunidad “La Mesa”. En concreto, se ha destruido más de nueve hectáreas del cerro “La Chuva” y al momento mucho material extraído. 60 toneladas en la cantera 1 y 50 toneladas en la cantera 2, se encuentran sueltos y que conforme la Agencia de Regulación y Control Minero, SENAGUA, GAD Municipal de Piñas, esta actividad no estaría autorizada-concesionada por el Estado que es dueño de estos recursos, es decir no existe ningún permiso ni licencia para realizar esta actividad, lo que lleva a la prenombrada autoridad a calificar la explotación como minería inconstitucional y prohibir la actividad. e. En cuanto al agua.- El veinte y dos de septiembre de 2011, la Secretaría Nacional del Agua, concedió a favor de miembros de la comunidad “La Mesa” y otras aledañas, el derecho de uso y aprovechamiento de las aguas de la vertiente La Mesa (desemboca en el río Calera) en las coordenadas 9589591, 649493, cota 1098 m. s. n. m., en media pendiente del cerro “La Chuva”, para uso doméstico y para abrevadero de animales; la comunidad “El Portete”, también se beneficia de los servicios ambientales que presta el cerro, en la misma fuente de la vertiente La Mesa, en las siguientes coordenadas: (i) Altitud 1082 m.s.n.m., X: 649472; Y: 9589727; (ii) Altitud 1012 m.s.n.m., X: 649516, Y: 9589728, utilizando el recurso hídrico para diferentes actividades como uso doméstico, consumo humano, riego, crianza de aves y cerdos. De la misma forma, el recurso hídrico proveniente del cerro “La Chuva”, quebrada La Mesa, es utilizado aguas abajo por otras personas. Este derecho ius fundamental del Buen Vivir, se ve gravemente afectado por la actividad de explotación de pétreos antes mencionada, así lo ha descrito la autoridad del Agua en el Memorándum número SENAGUA -D.H.P.-C C.A.C.Z. R.H.-2020-02, de fecha 6 de febrero de 2020, en específico: “(...) de continuar con la expansión y explotación de la cantera de material pétreo, especialmente en el rumbo Sur, las fuentes hídricas existentes en el sector, que proporcionan de agua para las actividades domésticas y agropecuarias de los moradores de los sitios el Portete y la Mesa, tienden a desaparecer”, es más, por parte de los pobladores de las comunidades “La Mesa” y “El Portete” expresan claramente que se ha reducido el caudal y acceso al agua, por lo que, han tenido que recurrir a las autoridades del Gad Municipal del Cantón Piñas, para pedir que se les dote de agua potable sin obtener respuestas motivadas, recordando que: “Las actividades contaminantes producidas por la explotación minera ilegal pueden llegar a tener impactos directos sobre la salud de las personas y adicionalmente, otra clase de impactos indirectos sobre el bienestar humano, como la disminución de productos del bosque que afecta el balance alimentario y medicinal, y puede producir cambios en las prácticas tradicionales, usos y costumbres (...)” Y además Juez/a constitucional, se puede apreciar que en la cantera 1 y 2 del cerro “La Chuva” existen ojos de agua destruidos por la explotación, brota agua desde el suelo por el movimiento de tierra que se ha hecho, existen zonas húmedas de la cantera que creemos es parte del caudal ecológico del cerro. f. En cuanto al suelo.- Es necesario establecer que la actividad minera inconstitucional y antitécnica en la cantera 1 y 2 en el cerro “La Chuva” se ha realizado sin seguir ningún tipo de lineamiento profesional, por lo que, es una destrucción “casi verticales, de más de 40 metros de altura; no se evidencia bermas de seguridad, ni señalética”, generando que grandes cantidades de suelo se deslicen principalmente en épocas de invierno, también se aprecia gran número de grietas de longitud extensa: (i) alrededor de las canteras, (ii) fuentes de agua (iii) inmuebles de comuneros/as. Esta circunstancia amenaza en que parte del cerro pueda deslizarse hacia las comunidades aledañas a las canteras, tapar caminos de acceso, fuentes de agua, o causar afecciones a las personas que todos los días transitan alrededor de las canteras. A todo esto, se debe enfatizar que esta

actividad inconstitucional ha consumido más de 9 hectáreas del cerro. g. Estando la cantera número 1 y 2 ubicadas en el camino de acceso a la comunidad “La Mesa”, todos los días habitantes de esta comunidad tienen que sufrir un calor excesivo, lodo (dependiendo de la época), polvo, soledad, tristeza y miedo al transitar por las canteras y percibir la magnitud del daño y destrucción provocada. h. Estas situaciones han sido tomadas en cuenta por la comunidad “La Mesa”, “Portete, en sus directivas y organizaciones en defensa de los derechos y ciudadanía en general, por lo cual, han solicitado desde hace diez años la intervención del Estado en estas actividades inconstitucionales, así como, la prestación de servicios públicos básicos, pese a ello, las autoridades locales no han realizado ninguna actividad para permitir el Buen Vivir, salvo la ARCOM, que en el año 2012 por denuncia ciudadana suspendió la destrucción del cerro “La Chuva” en los puntos PSAD 56, coordenadas X 649710; coordenadas Y 9590573; WGS84: coordenadas X 649451, coordenadas Y 9590199, identificada por la ARCOM como cantera 1; lo mismo ocurrió PSAD 56: coordenadas X 649739; coordenadas Y 95901581; WGS84: coordenadas X 649480, coordenadas Y 9589784, identificada por la ARCOM como cantera 2, sin embargo se continuaban realizando actividades, por lo que, nuevamente por denuncia ciudadana, en fecha 24 de enero de 2020 se prohibió la actividad destructiva en las dos canteras antes descritas y el GAD Municipal de Piñas dotó temporalmente de un guardia municipal a la entrada de las canteras (también de la comunidad la Mesa). i. Las actividades destructivas sin ningún tipo de medida o control antes descritas y realizadas en las canteras 1 y 2, han sido aprovechados (como es de conocimiento público), generalmente, de lunes a viernes con un horario de 8h00-16h00 en los últimos quince años por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Piñas y Provincial del Oro, mismos que han utilizado el material extraído en diferentes actividades. Todo esto sin cumplir con el ordenamiento jurídico ecuatoriano en cuanto a los límites permisibles para realizar actividades antrópicas de alto riesgo como la extracción de recursos naturales no renovables propiedad del Estado ecuatoriano, y olvidando reparar integralmente a la Naturaleza y seres humanos, conforme se ha solicitado en el mes de enero de 2020, pese a que, estas entidades del Estado están obligadas por la Constitución de Montecristi a respetar y hacer respetar los derechos ius fundamentales y cumplir sus atribuciones. No obstante, también se ha podido verificar que se continúa realizando actividad destructiva de minería a cielo abierto en otra parte del cerro “La Chuva”, en específico. Sistema de referencia (lugares) WGS84 UTM 17 SUR: (i) X: 648403, Y: 9590053; (ii) X: 648422, Y: 9590080; (iii) X: 648590; Y: 9590236, conforme vuestra Autoridad podrá apreciar en las fotografías adjuntas. Así mismo, se han realizado actividades mineras dentro del inmueble denominado Recinto Ferial, y en otro lugar, se está modificando el suelo de parte del cerro “La Chuva” para que, se asiente un relleno sanitario, ubicado en las estribaciones sur occidentales del cerro, cercano a las comunidades “Guayabal” y “Piedra Blanca”. j. Se debe recalcar en este punto que el abandono que viven las comunidades que se asientan en el cerro “La Chuva”, en especial “La Mesa” es de tal magnitud que tienen acceso limitado a los servicios públicos básicos para su comunidad; centros médicos cercanos, escuelas, colegios, parques y otros de suma importancia para el desarrollo normal de la personalidad y el correcto ejercicio de derechos fundamentales, por esta razón, estas comunidades se han organizado para deliberar y tomar un conjunto de posiciones entre las que se encuentran presentar una garantía jurisdiccional constitucional, estar atentos a las actividades de extracción del material pétreo, proteger las fuentes de agua, velar por los derechos de la naturaleza y sus integrantes, empero, también se han presentado conflictos con miembros de la comunidad (una familia) que de una forma u otra rechazan nuestra decisión tomada con el argumento de que “se meterán en problemas, el Estado no brindará ayudas, se tomarán represalias”, entre otras circunstancias que complican las relaciones interpersonales a causa de actividades inconstitucionales, antitécnicas y destructivas como es la minería a cielo abierto de pétreos. k. Estas circunstancias de sufrimiento del cerro, su ecosistema y seres que

habitamos y somos el cerro, así como el grave daño que se produce a todos los sujetos de derechos que incluyen las generaciones futuras, son reales, ciertas, antijurídicas, directas, pero también potenciales, transversales y futuras, que su autoridad debe conocer y resolver conforme la Constitución de Montecristi. Como VIOLACIÓN DE UN DERECHO CONSTITUCIONAL, se hace mención: La naturaleza como sujetos de derecho, tiene derecho al respeto integral, derecho a la restauración. Sujeto de derechos Ser humano en cuanto a las comunidades: “La Mesa”, “El Portete” y las generaciones futuras: Categoría de derechos del Buen Vivir: ambiente sano y ecológicamente equilibrado; salud; agua y alimentación; hábitat seguro y saludable, desarrollo sostenible y seguridad humana; Categoría personas y grupos de atención prioritaria: atención preferente y especializada por parte de los poderes públicos y privados. Categoría derechos de libertad: derecho a una vida digna, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad formal y material, libre desarrollo de la personalidad, derecho a dirigir quejas y peticiones, derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Categoría derechos de protección: derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, derecho al debido proceso (debido procedimiento administrativo), derecho a la motivación, derecho a la seguridad jurídica. Categoría derechos de participación: participar en los asuntos de interés público; derecho a la consulta ambiental. En cuanto a las generaciones futuras: derecho al desarrollo sustentable, derecho a un futuro seguro, derecho a una justicia intergeneracional, ecológica y climática, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al agua, derecho al hábitat seguro y saludable, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a una tierra preservada, derecho a la libertad de opción, derecho al desarrollo individual y colectivo sobre la tierra, derecho a la seguridad jurídica. Acción u omisión de entidades públicas: Ahora bien, en la presente acción es necesario determinar la acción u omisión por parte del poder público para que sea legitimado pasivo en la causa, así como responsable de la reparación integral, recordando que nos encontramos bajo el sistema de responsabilidad objetiva del Estado, con especialidad en el daño ambiental, daño ecológico y en la comprensión que los derechos constitucionales son límites y vínculos fundamentales tanto para los poderes públicos cuanto para los privados. A más de ello, en cuanto a las omisiones deberá tener presente el bloque de constitucionalidad: artículo 14, 71, 72, 73, 276, 277, 313, 317, 318, 389, y 390 de la Constitución de Montecristi. Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Piñas: Acción: el gobierno municipal viene explotando, aprovechando y beneficiándose de la minería inconstitucional realizada en la cantera 1 y 2 del cerro “La Chuva”, tal es así que la ARCOM suspendió la actividad el año 2012 y la prohibió en el año 2020; así mismo se tienen fotografías, vídeos, testimonios y otros medios de prueba de retroexcavadoras, volquetas y vehículos oficiales de la Municipalidad extrayendo, cargando, transportando y utilizando el material. Es más, en una forma bastante clara el legitimado pasivo responde en fecha 10 de febrero de 2020 a una solicitud presentada por la ciudadanía, aceptando que ha transportado, aprovechado y beneficiado del material pétreo extraído ya no sólo en la cantera uno y dos sino también en otros lugares del cerro “La Chuva”, por ello se le da la calidad de legitimado pasivo. Omisión: En referencia al control de la explotación de pétreos en el cantón Piñas, esta municipalidad ha incumplido: la Constitución de Montecristi en el artículo 264 numeral 12 atribuye a los GAD’s Municipales la competencia para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón, 395, 396, 397, 408 y 414; el artículo 55 literal (1) del COOTAD, de la misma forma el Consejo Nacional de Competencias en su resolución de fecha 08 de enero de 2015, No. U004-CNC-2014 reconoce la antes descrita competencia como exclusiva del GAD Municipal de Piñas; en fecha 17 de agosto de 2015 (Registro Oficial martes 24 de noviembre de 2015) mediante la Ordenanza para Regular, Autorizar y Controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentran en los lechos de los ríos y canteras existentes en la jurisdicción del cantón Piñas, artículo 1, 2, 3, 9,

17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 93, 95, 97, 98. En referencia al Código Orgánico del Ambiente: artículo 27; artículo 164, 291, 292, 309, y demás pertinentes; Existiendo las obligaciones jurídicas claras, no ha ejercido las competencias; (i) no ha realizado el seguimiento; (ii) no ha iniciado el procedimiento para determinar responsabilidades; (iii) no ha reparado integralmente al cerro; (iv) no ha suspendido o prohibido la actividad minera inconstitucional; (v) no ha impedido que el material sea explotado, cargado, transportado y aprovechado por el GAD cuando era minería inconstitucional; (vi) no ha denunciado en la Fiscalía General del Estado esta actividad inconstitucional, (vii) no ha aplicado los principios de precaución y prevención en actividades riesgosas o de alto impacto; (viii) no ha prestado los servicios públicos en forma oportuna y bajo los principios constitucionales. Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro: Acción: el gobierno provincial se viene aprovechando y beneficiando de la minería inconstitucional realizada en la cantera 1 y 2 del cerro "La Chuva", tal es así que la ARCOM suspendió la actividad el año 2012 y la prohibió en el año 2020; de la misma manera, contamos con fotografías, vídeos y testimonios que describen que volquetas y vehículos oficiales de la prefectura se encontraban realizando esa actividad. Omisión: Los artículos 262 numeral 4, 277 numeral 1, 278 numeral 1, 284 numeral 9, 295, 319 396, 397 y 414 de la Constitución; artículo 41 literal (a) del COOTAD, establece claramente la función que tiene que cumplir el GAD provincial en cuando al desarrollo sustentable y el Buen Vivir, particular que no lo ha cumplido, pues ha realizado actividades de minería ilícita perjudicando a la naturaleza y otros sujetos de derechos; así mismo, no ha denunciado a las autoridades competentes la minería inconstitucional, como tampoco ha impedido que los agentes o representantes del GAD transporten el material pétreo extraído, esto en referencia a que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos ius-fundamentales. Administración pública central: Omisión: teniendo en cuenta que es un deber y responsabilidad del Estado ecuatoriano velar por la garantía de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, el Ministerio del Ambiente del Ecuador, tiene un conjunto de obligaciones establecidas en el artículo 395, 396, 397, 398, 399 y demás disposiciones antes citadas de la Constitución de Montecristi; y, artículo 187, 190, 191, 199, 200 203 y 294 del Código Orgánico del Ambiente para actuar en caso del daño ambiental o cuando corresponda ante la amenaza, particular que no se ha realizado hasta el día de hoy; así mismo, conociendo que la autoridad ambiental nacional es la que debe otorgar en el caso que corresponda autorizaciones para libre aprovechamiento, no ha controlado la actividad minera inconstitucional. Concluye solicitando que se declare la vulneración de los derechos establecidos en el punto 3.1. de su acto de proposición. Restitución-Rehabilitación: al cerro La Chuva, y a los seres humanos. Conjuntamente se solicitó la MEDIDA CAUTELAR, para dejar sin efecto las acciones de ejecución.- Igualmente los accionantes afirman que no han presentado otra acción de protección sobre este caso; luego de ser completada la demanda, y por reunir los requisitos establecidos en el Art. 86 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo que señala el Art. 88 ibídem, se la acepto a trámite mediante auto de fojas 96, de fecha 22 de julio de 2020, a las 16h24, así mismo y de conformidad con lo determinado en las Reglas de procedimiento establecidas en La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispuso que sean convocadas tanto el accionante como las partes accionadas a la Audiencia Pública que se llevó a efecto el día 27 de julio del 2020 a las 10h30, audiencia que se suspendió en varias ocasiones, para recabar información, como lo dispone el inciso penúltimo del Art. 14 de la LOGJCC. Habiéndose reinstalado la audiencia el día 21 octubre del 2020, a las 16h00, emitiéndose una resolución oral como lo establece el artículo 14 de la LOGJCC. FUNDAMENTOS DE HECHO: 1.- DE LA AUDIENCIA PÚBLICA.- El día 27 de julio del 2020, a las 10h30; en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en su artículo 14 se efectuó la audiencia pública en donde se escuchó a todas las partes procesales:

DEFENSA TÉCNICA DE LA PARTE ACCIONANTE.- Se concedió la palabra a los accionantes Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en representación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas; quienes intervinieron por medio de sus Abogados patrocinadores los Abgs. Luis Alberto Buñay Sacoto y Cesar Crespo Loor, y en lo principal rescato lo siguiente: “...Representamos a la comunidad la “Meza”, “Portete” y “Yasunidos Piñas”, el Ecuador ha sido reconocido por su mega diversidad, el cerro la Chuva en combinación con el bosque seco del Perú y Colombia, en la cual hay un sin número de plantas y animales que incluso no han sido identificados, lugares en los cuales hay un sinnúmero de habitantes lugar donde se viene explotando por casi setenta años una cantera de material pétreo por parte del GAD Municipal del Cantón Piñas y GAD Provincial, sus habitantes soportan polvo ruido hasta ahora se afectado tres fuentes de agua, se han realizado inspecciones con lo cual se ha demostrado la afectación irreversible del ambiente, en el año 2007 ARCOM suspendió las actividades por no contar con los permisos respectivos, señor juez se ha puesto en riesgo la biodiversidad se ha hecho imposible el desarrollo a la vida, por lo que es indispensable que su autoridad evite la degradación, degradación que se agrava por el silencio de autoridades, por lo que solicitamos a usted señor juez se declare con lugar la presente acción de protección y se disponga se repare los daños causados. Señor juez producimos la documentación presentada por el GAD Municipal del Cantón Piñas, así como las autorizaciones de aprovechamiento de las vertientes y quebradas del sitio “La Chuva” denunciadas a la Secretaría del agua. Señor juez la carga de la prueba en la acción de protección está a cargo de la parte accionada lo cual no se lo ha realizado; señor juez la constitución contempla que el estado tomara medidas eficaces en cuanto a la destrucción del medio ambiente y sus impactos así como reparar los ecosistemas el código del ambiente establece que el Ministerio del ambiente debe intervenir cuando se establezca destrucción del medio ambiente; los accionados no han justificado la supuesta improcedencia de la presente acción de protección; señor juez así mismo la prueba anunciada y presentada por los accionados no ha sido producida conforme a derecho ya que no se han leído en las partes pertinentes. Señor juez las entidades encargadas en la regularización de las actividades de y del control en las explotaciones ilegales son las mismas que se han estado aprovechado ilegalmente del material lo cual el mismo Alcalde, lo ha manifestado que con la maquinaria del Municipio se ha extraído, en esta causa nosotros hemos comparecido en titular de derechos fundamentales ya que han resultado los derechos fundamentales como lo son el derecho al buen vivir, el debido proceso y el derecho a la participación, en esta acción de protección es una garantía jurisdiccional y constitucional tiene como única finalidad la tutela de los derechos fundamentales cuando se pueda existir un daño o vulneración de los derechos fundamentales y los hemos probado por medio de las pruebas testimonial, prueba documental y testimonios técnicos de grupos de investigación, quienes señalan que ha existido daño y no solo daño a la naturaleza, mantenimiento o circunstancia ecológicas, si no a los seres que viven en el sujeto de derecho de la naturaleza en el cerro de la Chuva en el momento que se destruye el cerro Chuva y que se lo hace de forma ilegal y anti técnica y faltando con los principios generales y lo primero que existe es una vulneración de los derechos constitucionales ya que este cerro Chuva que pueda cumplir con su función ecológica, de las plantas, los animales y todos aquellos que habitan ahí y puedan seguir reproduciéndose y haciendo su vida, en la investigación realizada que por medio de esta circunstancia hace que no pueda tener una reproducción estos seres vivos y esto se ha venido dando hace muchos años y no ha existido una autoridad que lo detenga por toda la flora y fauna que existan aquí así mismo las personas que habitan en el cerro Chuva se encuentran en peligro ya que en este lugar se puede realizar varias actividades deportivas y con su familia y también mencionar que en esta causa se fija el

principio de responsabilidad objetiva y debemos de ver por los daños que se han establecido por medio de la Constitución del Ecuador y no existe otro mecanismo, para que no se vulnera estos derecho y hemos establecido la reparación integral, los cuales se encuentran de manera adecuada para que no se siga dando el daño a esta flora y fauna, los cuales queremos que se toma como acción privilegiada para el cerro Chuva y como reparación integral también se realice el seguimiento estricto por medio de la Defensoría del Pueblo, que usted puede emitir señor juez. Defensa Técnica del GAD MUNICIPAL DE PIÑAS.- Dr. José Francisco Aguirre Murillo, en representación del GAD Municipal del Cantón Piñas, como procurador judicial quien manifestó lo siguiente: “ señor juez no estamos de acuerdo con la acción presentada por la comunidad “La Mesa”, como es la suspensión definitiva de la explotación del cerro “La Chuva” , ya que no se va a poder lastrar las vías, con esto se afecta al interés colectivo y general el cual prevalece sobre el interés particular , señor juez nosotros estamos prohibidos de invertir en el sector rural, la disminución del caudal del agua es un asunto en todo el país, señor juez las peticiones de las comunidades “La Mesa” no son de competencia de GAD Municipal, señor juez el Municipio de Piñas tiene un déficit de más de Seiscientos Mil Dólares en el segundo semestre, señor juez produzco diez pruebas documentales como son expediente administrativo en el cual se le concede al señor Ángel Torres autorización para explotar material aurífero en el cerro la Chuva, así mismo el permiso al mismo señor para explotar material en el sitio la mesa por seis hectáreas por un tiempo de diez años; tenemos un oficio del señor Ángel Torres, para que se rectifiquen las coordenadas lo cual no se ha podido hacer por estar cerrado el castro minero; oficio contestando el oficio antes referido en el cual se le hace conocer el cierre del catastro minero, oficio de la unidad de gestión ambiental al Alcalde haciendo conocer el error en las coordenadas, oficio del ARCOM indicando el cierre definitivo del castro minero desde al año 2018; certificado de avalúos y castros en el cual certifica que el sitio la Mesa es zona rural; certificación del director financiero al alcalde donde se hace conocer el déficit del municipal en el segundo semestre. Señor juez ratifico que no estamos de acuerdo con la acción de protección este es un asunto administrativo de competencia Ambiental y no judicial por lo que solicitamos el archivo de la misma sin ser acogida. Señor juez me ratifico en el contenido de mi exposición realizada por mi parte y de los documentos presentados no se necesita darle lectura a los mismos ya que fueron corridos traslado con los mismos a los accionantes. Señor juez como representante del GAD Municipal no estamos de acuerdo en la suspensión de la actividad afectando a la comunidad cantonal por el recurso de las mismas y si estamos de acuerdo que deben de cumplir con los planes del ambiente y de los pagos establecidos por ellos, pero no estamos de acuerdo señor juez. Defensa Técnica del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA.- El Ab. Junior Novarino Peñafiel Castillo, defensor técnico del Ministerio del Ambiente y del Agua, quien manifestó lo siguiente: “Señor juez nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua recién fucionados, manifestamos ante la presente demanda en al que se indica que no hemos velado los derechos del agua; señor juez conforme al Art. 40 de LOGJCC, establece los requisitos para que proceda a una acción de protección los cuales en la presente causa no se cumplen como es la vulneración de un derecho ya que los accionantes indican que no existen permisos para la explotación de materiales áridos en el cerro “La Chuva”, lo cual no es competencia de esta cartera de estado a la que represento, nosotros en base a nuestras competencias hemos cumplido con inspecciones técnicas de la cual una consta que no existe afectación al área indicada ya que existe un área de café abandonada; así mismo consta un informe de la antigua SENAGUA, se recomienda que las entidades como son el GAD Municipal de Piñas para que tome asunto en la explotación ilegal mediante oficio; los accionantes deberían haber señalado las trasgresiones por mi defendida para que se defienda de los mismo lo cual no lo han realizado por lo que la presente acción de protección seria improcedente ya que existen vías administrativas para reclamar los supuesto derechos violados. Señor juez al momento de emitir la sentencia respectiva en la siguiente causa se tome en

consideración los procesos fundamentales como primero las actividades que se realizan en el cerro la Chuva no está establecida por ningún organismo competente como lo demás ministerios, también se hace hincapié en las atribuciones que los demás organismos estatales como es en su artículo 226 de la constitución de la república y 225 de la ley orgánica y quisiera puntualizar en el informe del perito que menciona que este fue en base a una observación directa que no se utilice algún otro mecanismo en esta acción. Defensa Técnica del GAD PROVINCIAL DE EL ORO.- La Ab. Mariuxi Elizabeth Díaz Bravo, en su calidad de defensora técnica del GAD Provincial de El Oro, quien manifestó lo siguiente: “Señor juez debo manifestar que la competencia para el control en cuanto a la explotación de materiales áridos es del GAD Municipal del Cantón Piñas, por lo que mi defendida no tiene ninguna responsabilidad, señor juez la acción de protección no reúne los requisitos requeridos en el Art. 42 del LOGJCC, además de que existen vías administrativas para realizar sus reclamaciones, así mismo señor juez se debía demandar al señor Ángel Torres que tiene el permiso para explotaciones en el lugar; señor juez referente a que volquetes del GAD Provincial extraían material pétreo presento el respectivo convenio de la mancomunidad entre mi representada y GAD Municipal para el lastrado de la vía al sitio donde se realiza el relleno sanitario de este Cantón, no se ha justificado que los vehículos de mi representada hayan realizado transporte de material aurífero de las canteras en el cerro “La Chuva”, por lo que solicitamos se deseche la presente acción de protección. Señor juez el análisis que se debe de realizar es que toda actividad tanto comercial que es para el desarrollo del hombre va tener una consecuencia a la naturaleza y así como en otros lugares como la extracción de minería en Zaruma y entre otros que entonces que se deben de cerrar ya que este no se puede admitir o establecer la intervención de la parte accionante que se quiere establecer como zona protegida el cerro Chuva ya que existe lugares privados los cuales pueden ser un peligro para el ambiente, pero no por haber realizado un mal manejo si no es producto de una actividad pero se puede reducir pero eliminarlo no, pero toda actividad se lleva a cabo por medio de un plan pero no establecer el cerro Chuva como un área protegida ya que existe personas que viven ahí, y tienen sus terrenos privados, pero no se puede establecer el cerro la Chuva más allá de lo establecido en la constitución como es el derecho a la propiedad privada, al trabajo, al servicio público que beneficie a la ciudadanía y la explotación minera ya que este produce ingreso para el país y a todas las personas, pero no se puede pretender como área protegida esta zona del cerro de la Chuva y no hemos intervenido en la contaminación en esta zona ya que no somos una institución que vulnere los derechos de las personas que habitan ahí y sin que altere algún derecho constitucional. Defensa Técnica en calidad de TERCERO INTERESADO ÁNGEL TORRES.- EL Ab. Paulo Roberto Mata Chiriboga, en representación del señor Ángel Gerónimo Torres López, quien manifestó lo siguiente: “Señor juez mi defendido tiene autorización para realizar minería artesanal en el área minera “Don Ángel”, por lo que rechazamos la presente acción de protección ya que en el lugar donde mi defendido realiza la explotación existe afectación alguna al medio ambiente o recurso hídrico, porque he procedido a presentar en la secretaría del agua para que se realice una inspección en la propiedad de mi defendido para que se determine si en base a las actividades realizadas por mi defendido se han afectado los caudales de agua, dentro de la superficie del cerro “La Chuva” no solo mi defendido ha estado explotando dicha área sino también el GAD Provincial de El Oro para obra social, señor juez cuando se solicitó el permiso de minería artesanal la competencia la tenía ARCOM, se pidió la concesión dentro del terreno del señor Ángel Torres y por un error de dicha institución le dan el permiso en una propiedad donde no le corresponde a él, luego de eso señor juez una vez que asumieron los municipios dicha competencia se ha procedido a presentar al GAD Municipal del Cantón Piñas se corrija y rectifiquen las coordenadas dentro del terreno del señor Ángel Torres.- Defensa Técnica en calidad de AMICUS CURIAE señores.- Señor juez de acuerdo a los informes técnicos los cuales responde a una prueba ambiental rápida y no se ha establecido el daño de

los químicos en la flora y fauna sobre las preguntas que se les ha realizado ya que estos son asuntos de riesgos, ya que las contestaciones del perito y del informe que se regularice la actividad y estamos inmersos a lo expuesto en esta situación y que se debe de tomar en consideración los derechos que fueron afectados tanto fundamentales como constitucionales el cual nos encontramos en una ponderación de derechos y proteger los derechos de toda una comunidad y establecer a un cerro como una área protegida pero realizando un informe más detallado.

2.- DE LOS MEDIOS DE PRUEBA PRESENTADOS.-

2.1.- Por la parte ACCIONANTE se presentó la siguiente prueba:

a) **PRUEBA DOCUMENTAL Y DIGITAL:**

- 1) Copia de oficio emitida (original de recibido) por el Comité Promejoras y de los moradores de La Mesa y Piedra Blanca, para el GAD Municipal de Piñas de lugar y fecha, Piñas mayo 21 de 2018 con número de recibido 1585 en fecha mayo 21 de 2018.
- 2) Copia de oficio emitida por el Comité Promejoras y moradores del sitio La Mesa y Piedra Blanca, para Ministerio del Ambiente-El Oro de lugar y fecha Piñas mayo 31 de 2018, y recibido por Ministerio del Ambiente Zaruma en fecha junio 05 de 2018.
- 3) Copia de oficio emitida por el Comité Promejoras del sitio La Mesa, para el GAD Municipal de Piñas, de lugar y fecha, Piñas febrero 26 de 2019 y recibido en fecha febrero 26 de 2018.
- 4) Copia de oficio emitida por el Comité Promejoras del sitio La Mesa, para el GAD Provincial de el Oro de lugar y fecha, Piñas febrero 26 de 2019.
- 5) Copia de oficio emitida por el Comité Promejoras del sitio La Mesa, para el GAD Municipal de Piñas de lugar y fecha Piñas agosto 13 de 2019, con número de recibido 1229 en fecha agosto 13 de 2019.
- 6) Copia de oficio emitida por el sitio La Mesa, para el GAD Municipal de Piñas de lugar y fecha, Piñas diciembre 13 de 2019 con número de recibido 2933 en fecha diciembre 13 de 2019.
- 7) Copia de oficio emitida por el sitio La Mesa, para el GAD Municipal de Piñas de lugar y fecha, Piñas enero 13 de 2020 con número de recibido 141 en fecha enero 13 de 2020.
- 8) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el GAD Municipal de Piñas en la persona de su alcalde, de lugar y fecha, Piñas enero 23 de 2020, recibid en fecha enero 23 de 2020 con número de recibido 326.
- 9) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para la Unidad de Gestión Ambiental del Cantón Piñas, de lugar y fecha, Piñas enero 23 de 2020, recibido en fecha enero 23 de 2020.
- 10) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para la Comisaría Municipal Cantón Piñas, de lugar y fecha, Piñas enero 23 de 2020 recibido en fecha enero 23 de 2020.
- 11) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el Concejo Cantonal del Cantón Piñas, de lugar y fecha, Piñas enero 23 de 2020 recibido en fecha enero 23 de 2020.
- 12) Oficio N°038-2020 GDMMP.CM suscrito por el Comisario Municipal Mario Roca Suárez, y que consta de 3 fojas, el mismo busca comprobar la conducta estatal ante requerimientos ciudadanos y el conocimiento por parte del Municipio y Comisaria de la explotación y visita de ARCOM en fecha 24 de enero de 2020 y más hechos narrados en esta garantía.
- 13) Oficio N°017-SG-GADM-P-2020 suscrito por el Abogado José Samaniego Jaramillo Secretario General del GAD Municipal de Piñas, en el que se contesta el oficio presentado en fecha enero 23 de 2020 para el GAD Municipal de Piñas y recibido en fecha enero 23 de 2020.
- 14) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el Concejo Cantonal del Cantón Piñas, de lugar y fecha, Piñas enero 31 de 2020 con número de recibido 429 en fecha enero 31 de 2020, en la cual se emite respuesta al oficio N° 017-SG-GADM-P-2020.
- 15) Oficio N°024-SG-GADM-P-2020 suscrito por el Abogado José Samaniego Jaramillo Secretario General del GAD Municipal de Piñas, en el que se contesta el oficio presentado para el GAD Municipal de Piñas y recibido en fecha enero 31 de 2020.
- 16) Oficio N° ARCOM-MC-CR-2020-0188-OF suscrito por el Ingeniero Cristhian Xavier Benalcázar Orosco, Coordinador Regional de Regulación y Control Minero, de lugar y fecha Machala febrero 14 de 2020, en el que se contesta el oficio presentado por la comunidad La Mesa de fecha diciembre 19 de 2019, el cual remite el informe realizado por los técnicos del ARCOM.
- 17) Memorando Nro. ARCOM-P-OT-2020-0043-ME suscrito por el Ingeniero

Walter Enrique Apolo Valarezo, Especialista de Seguimiento Técnico Minero Regional, de lugar y fecha Portovelo, 07 de febrero de 2020, en el que consta inspección de fechas enero 24 y febrero 06 de 2020. 18) Copia de oficio emitida por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el Gobierno Provincial de EL Oro de lugar y fecha, Piñas enero 31 de 2020 y recibido en fecha enero 31 de 2020 por la misma entidad, solicitando información pertinente a procesos de libre aprovechamiento que se hayan tramitado en alguna ocasión por parte del Gobierno Provincial en mención en el sector La Chuva. 19) Oficio emitido por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el Gobierno Municipal de Piñas de lugar y fecha Piñas enero 31 de 2020 y recibido con número 430 en fecha enero 31 de 2020 por la misma entidad, solicitando información pertinente a procesos de libre aprovechamiento que se hayan tramitado en alguna ocasión por parte del Gobierno Provincial en mención en el sector La Chuva. 20) Oficio emitido por la presidenta de la comunidad La Mesa, para el Gobierno Municipal de Piñas de lugar y fecha Piñas enero 31 de 2020 y recibido con número 431 en fecha enero 31 de 2020 por la misma entidad, solicitando información pertinente a propietarios de los predios constantes en los puntos geo-referenciados en el oficio. 21) “Informe Técnico de visita realizado a la comunidad La Mesa, cantón Piñas de la provincia de El Oro, debido a la actividad de extracción minera” elaborado en fecha 5 de marzo de 2020 por un equipo técnico conformado por Ingenieras Ambientales Josselyn Mariana Muentes Vélez, María Elisa Muñoz Tello y un Ingeniero Agrónomo, miembros de “Metallura Equipo de Gestión Ambiental”, con base a la visita realizada a la zona afectada por la mencionada extracción de áridos y pétreos y zonas aledañas los días 29 de febrero y 1 de marzo del presente año. Este archivo se encuentra en formato digital en un CD-R- 22) Copia certificada otorgada por parte de “Demarcación Hidrográfica de Puyango-Catamayo, Centro de Atención al Ciudadano de Zaruma. Unidad de Asesoría Jurídica” del procedimiento administrativo para concesión de uso de agua, con número N° 1640-2017, a favor de la ciudadana Magaly Jackeline Huiracocha Acaro, con la que demostraremos que en el cerro “La Chuva” existen fuentes de captación de agua, y que dicha captación está ubicada en las coordenadas X:649572, Y:9589678, es decir a menos del metraje permitido por la ordenanza que regula la extracción de áridos y pétreos del cantón. 23) Copia certificada otorgada por parte de “Demarcación Hidrográfica de Puyango-Catamayo, Centro de Atención al Ciudadano de Zaruma. Unidad de Asesoría Jurídica” del procedimiento administrativo para concesión de uso de agua, con número N° 026-2010-C, a favor de los ciudadanos Idelfonso María Aguilar Romero, Rogelio Eudoro Guaman Ramírez, Víctor José Celi Celi, Flor María Ortega Valarezo, Segundo Alberto Aguilar Ortega, Alfredo Alejandro Acaro Ramírez y César Augusto Aguilar Ortega con la que demostraremos que en el cerro “La Chuva” existen fuentes de captación de agua, y que dicha captación está ubicada en las coordenadas X:649493, Y:9589591, es decir el cerro es fuente del sustento vital agua para distintos usos. 24) CD, certificada mediante documento físico original suscrito por su creador Señor. Carlos Espinoza Macas periodista de la radio “Radio Impacto”, información contenida en CD donde consta tres archivos con contenido audiovisual pertinente a los hechos de esta acción, el cual pretende probar declaraciones hechas por el alcalde del cantón Piñas sobre la controversia establecida en esta acción jurisdiccional. Mismo que se reproducirá en la forma procesal establecida por el COGEP, es decir, a través de cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. 25) CD, certificada mediante documento físico original suscrito por su creador Señor. Vinicio Jara periodista de la radio “CQ-15TV”, información contenida en CD donde consta un archivo con contenido audiovisual pertinente a los hechos de esta acción, el cual pretende probar la suspensión/prohibición de actividades mineras que se han realizado en el año 2012 en el cerro “La Chuva”. Mismo que se reproducirá en la forma procesal establecida por el COGEP, es decir, a través de cualquier medio idóneo para su percepción por los asistentes. 26) CD-R., en el que constan archivos en fotos y videos en relación a la extracción de materiales del cerro “La Chuva”, destrucción del cerro y demás hechos narrados

en esta acción. b) PRUEBA TESTIMONIAL: 1) Representante de la Municipalidad del Cantón Piñas, el alcalde Jaime Wilson Granda Romero; 2) Ing. Melissa Paola Espinoza Ramírez Directora de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Piñas; 3) Ingeniera Ambiental Josselyn Mariana Muentes Vélez, Ingeniera Ambiental María Elisa Muñoz Tello, y El Ing. Agrónomo ancestral, que elaboraron el “Informe Técnico de visita realizado a la comunidad La Mesa, cantón Piñas de la provincia de El Oro, debido a la actividad de extracción minera” 4) En calidad de TESTIGOS de los hechos: 5) Ingeniero Walter Enrique Apolo Valarezo, especialista de seguimiento técnico minero regional, perteneciente a la Agencia de Regulación y Control Minero ARCOM Machala; 6) Ingeniero Raúl Gaona G., técnico R.H. C.A.C.Z. D.H. P-C. De la Secretaría del Agua; 7) Ingeniero Willan Jaramillo L., Analista Social C.A.C.Z. D.H. P-C. De la Secretaría del Agua; 8) Ingeniero Máximo González C., técnico de administración de recursos hídricos demarcación hidrográfica Puyango, Catamayo, Senagua, mismo que realizó el informe sobre la: “UBICACIÓN ESPACIAL DE LAS AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUA LA MESA Y EL PORTETE-QUEBRADA LA MESA RIO LA CALERA”; 9) Testimonio del señor Ángel Torres.

2.2. Por la parte ACCIONADA se presentó la siguiente prueba: a) PRUEBA DEL GAD. MUNICIPAL DE PIÑAS: 1) Expediente administrativo en el cual se le concede al señor Ángel Torres autorización para explotar material aurífero en el cerro la Chuva; 2) Permiso al mismo señor para explotar material en el sitio la mesa por seis hectáreas por un tiempo de diez años; 3) Oficio del señor Ángel Torres, para que se rectifiquen las coordenadas lo cual no se ha podido hacer por estar cerrado el castro minero; 4) Oficio contestando el oficio antes referido en el cual se le hace conocer el cierre del catastro minero; 5) Oficio de la Unidad de gestión ambiental al Alcalde haciendo conocer el error en las coordenadas, 6) Oficio del ARCOM indicando el cierre definitivo del castro minero desde al año 2018; 7) Certificado de avalúos y castros en el cual certifica que el sitio la Mesa es zona rural; 8) certificación del director financiero al alcalde donde se hace conocer el déficit del municipal en el segundo semestre. b) PRUEBA DEL GAD. PROVINCIAL DE EL ORO: Presento el respectivo Convenio de la Mancomunidad entre mi representada y GAD. Municipal Piñas, para el lastrado de la vía al sitio donde se realiza el relleno sanitario de este Cantón.

2.3.- PRUEBA TERCEROS.- Los Ciudadanos Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, presentaron prueba documental, y ejercieron el principio de contradicción, sobre la prueba pericial actuada en Audiencia Pública.

2.4.- PRUEBA ORDENADA POR EL JUZGADOR.- Se dispuso la intervención de un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura, en el área de medio ambiente y áreas afines con el objeto de realizar una Inspección judicial, y que al ser la carga de la prueba de la parte accionada se dispone que entre las cuatro partes se cancelen los honorarios del perito en partes iguales de 26/08/2020, a las 10:00, para trasladarnos al lugar de la supuesta afectación, y constatar los hechos demandados. Así mismo se dispone insistir nuevamente a la ARCOM, para que se sirva remitir la información requerida concediéndole nuevamente el termino de cuarenta y ocho horas para su cumplimiento.

CUARTO: CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL JUEZ PONENTE.- A) ANÁLISIS CONSTITUCIONAL: 1.- NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- La Acción de Protección la encontramos dentro de las Garantías Constitucionales, propiamente en las garantías jurisdiccionales artículo 88 de nuestra Constitución de la República, donde señala que: “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Por lo que su objetivo está enfocado, al

amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en nuestra Constitución, teniendo como fin reparar el daño causado, hacerlo cesar si se está produciendo o para prevenirlo si es que existe la presunción o indicios claros de que el acto ilegítimo puede producirse. 2.- **PLANTEAMIENTOS JURÍDICOS DE LOS QUE DEPENDE LA RESOLUCIÓN DE LA CAUSA.**- Para realizar la argumentación jurídica del caso examinado, es necesario advertir, que el análisis de fondo de esta resolución se basará en la acción de protección planteada; y que radica en responder tres grandes preguntas, que surgen a partir de los hechos principales a resolver, que son: 1) ¿Existe la suficiente legitimación activa en los accionantes, para presentar la demanda constitucional, en favor de la naturaleza, y para sí mismos? 2) Las operaciones extractivas del cerro “La Chuva” por parte de los entes accionados y terceras personas, ¿causan daño y como tal vulneran derechos constitucionales?, y, 3) ¿Existe otra vía judicial más adecuada y eficaz para proteger los derechos constitucionales demandados? La resolución de estas incógnitas, nos conllevaran a despejar la hipótesis principal contenida, en que los accionantes sufren una vulneración de derechos constitucionales, porque se está afectando gravemente el ecosistema, incidiendo en este y en ellos. 3.- **RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS:** 1) ¿Existe la suficiente legitimación activa en los accionantes, para presentar la demanda constitucional, en favor de la naturaleza, y para sí mismos? La demanda se fundamenta en la petición de tutela de un derecho difuso, su protección está garantizada a través de la acción de protección, de una manera especial, por cuanto para evitar o remediar su violación, no solamente se puede proponer dicha acción contra una autoridad pública, sino que puede ser propuesta contra particulares por parte de cualquier persona, puesto que cada uno de los ciudadanos somos titulares de este, y se tiene la suficiente legitimación activa, para acudir a la administración de justicia constitucional. La tutela que está prevista a través de la acción de protección, fue concebida como una acción constitucional para el amparo directo y eficaz de los derechos, dirigida a proteger constitucionalmente las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas, privadas y de personas particulares. Adicionalmente, el constituyente estableció la posibilidad de que estas acciones se puedan ejercer de forma individual, colectiva para que pueda proponer las acciones, previstas en la Constitución. Según la doctrina, la legitimación que se tiene para comparecer a un proceso, es una cualidad derivada de la relación de titularidad del derecho subjetivo o de la obligación, que permite a una persona plantear una pretensión o contradecirla, en un caso determinado. Al respecto las teorías principalmente contemplan una de tipo clásico, según la cual la legitimación nace de la titularidad real de la relación sustancial, también denominadas monistas y otras de tipo moderno, según las cuales existe legitimación, con sólo afirmar esa titularidad, aunque a fin del proceso se establezca que ella no existía, conocida como teoría dualista. La mencionada legitimación surge del plexo constitucional, que en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que “toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses”; es decir que se contempla la posibilidad de concurrir al aparato judicial, a pedir por sus derechos, y recibir de este una tutela, y que este enunciado constitucional, no se limita únicamente al derecho de las personas de forma individual, sino que también se amplía al derecho colectivo, en donde ya pasamos a una legitimación extraordinaria, que para el derecho constitucional, y de avanzada, como el propuesto en la carta de navegación de Montecristi, tiene plena vigencia. En el mismo orden de ideas, y en correlación a la referida norma constitucional, la Ley Fundamental ecuatoriana, en su artículo 71 inciso segundo, dispone que la persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, por lo que la acción constitucional que se plantea, tiene legitimación activa suficiente, para ejercerse por parte de los accionantes, en representación de la naturaleza, quedando justificada la misma. Es necesario dejar sentado, que esta relación, naturaleza seres humanos, estos últimos como parte de ese

sistema, que se nutren y habitan en él, también le asisten derechos fundamentales, que se desprenden del primer ente, y que en el caso sub judice, es lo que da paso, a que esa justiciabilidad de los derechos, y la exigencia del buen vivir, con todas las aristas que desarrolla la Constitución del 2008, legitime su accionar, y como lo recoge el numeral 3, del artículo 11 ibídem, permitiendo que sean exigibles y no solo una mera enunciación. «Lo que debe justificar quien se presenta a reclamar tutela para un derecho colectivo, no es, entonces, la titularidad del derecho, sino únicamente que pertenece a la categoría de personas que la ley ha establecido como autorizadas para iniciar un proceso colectivo. Por eso la legitimación para la defensa de derechos colectivos, es una especie de legitimación extraordinaria, cuya principal característica es que no se necesita hacer una afirmación de titularidad del derecho, sino que se la tiene porque la asigna la ley.» [Edwin Quinga, La Legitimación para la defensa de los derechos colectivos, 2009, Pág. 66]. La titularidad con la que han comparecido los accionantes, es en representación de las Comunidades “La Mesa” “El Portete” colectivo “Yasunidos Piñas” y que habitan, en el sector de la presunta vulneración, y que principalmente refieren que estas Comunidades, se encuentran siendo afectadas, por las actividades denunciadas en contra de la naturaleza, siendo correcta la legitimación propositiva de la acción de protección de los intervinientes, y que les corresponde este derecho de activar el órgano de justicia, en los términos planteados. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, ha dicho que “en el caso de los derechos colectivos o intereses difusos no se puede predicar una titularidad subjetiva del derecho y por lo tanto es necesario modificar el concepto tradicional para dar lugar a la efectiva protección del derecho”. [Sentencia T-067-93, de unificación jurisprudencial, recuperado de http://www.usergioarboleda.edu.co/postgrados/material_derecho_administrativo/Accionesdegrupoconferencialier.doc.] por lo que la titularidad no le corresponde únicamente a las personas afectadas, ni tampoco se requeriría de todos ellos para ejercer una acción, y que en la especie tenemos que los representantes de estas comunidades “La Mesa” y “El Portete”, plantean la acción de protección, por los derechos de representación que ostentan, así como también por sus propios derechos, siendo adecuada la titularidad alegada, y que a esto se suma, que los derechos de la naturaleza, pueden ser reclamados por cualquier persona, y en todo momento, no siendo necesaria una exclusiva titularidad de derechos, para pedir por ellos. La Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en su artículo 9, conceptualiza la legitimación activa, y refiere: “Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al derecho produce.” Por lo que, a más de lo citado anteriormente, tenemos que la legitimación activa, se complementa, cuando existe un daño demostrable, y que en la especie refieren los accionantes, que existe un daño grave a la naturaleza, y como consecuencia de este, también se están afectando sus derechos constitucionales, por lo que la legitimación activa, aparentemente se cumple, y que en este apartado, no se va a realizar el abordaje correspondiente a la existencia o no del daño-, ya que éste se introducirá más adelante, dentro de las preguntas a responder; por lo que se va a proceder a estructurar, la presente motivación, como un examen de valoración a las acciones denunciadas, y que evidencian que en la explotación del cerro “La Chuva”, se ha violentado derechos constitucionales, rebasando las cuestiones de legalidad. 2) Las operaciones extractivas del cerro “La Chuva” por parte de los entes accionados y terceras personas, ¿causan daño y como tal vulneran derechos constitucionales? Para responder esta segunda pregunta capital, amerita un análisis mayor, del que nos plantea en sí la pregunta, para lo cual lo abordaremos desde tres cuestiones trascendentales: la primera en torno a establecer la existencia del daño, que podríamos denominar también materialidad del hecho; la segunda consiste en establecer responsabilidades, ya que no podríamos limitarnos únicamente a decir que existe o no el daño, amerita que se señale los causantes, o como se origina este; y en una tercera cuestión pasaremos a identificar la presunta vulneración demandada. 2.1. Como lo

habíamos anotado en la pregunta anterior, la legitimación activa, también tiene su razón de ser en la existencia de un daño demostrable. Por otra parte los accionantes, en su demanda mencionan que: “La Chuva” brinda un conjunto de servicios ambientales para los seres humanos permitiendo tener acceso al agua; que se realicen actividades de agricultura (alimentación) y, su suelo permite que los seres humanos se asienten en sus faldas, un entorno tranquilo y en armonía con la naturaleza, (...) en el cerro “La Chuva” se viene realizando actividades de extracción y transporte de recursos naturales no renovables como es el lastre (explotación) y otros, (...) hace aproximadamente quince años la explotación de este recurso no renovable se aceleró en forma abrupta, destruyendo gravemente parte del cerro. Para realizar esta actividad de alto riesgo, calificada como minería a cielo abierto y de uso intensivo, en donde se han extraído grandes capas de tierra, piedras, realizándose perforaciones profundas con retroexcavadoras, actividades que generan mucho ruido y levanta polvo en grandes cantidades, se destruyó la zona forestal (quema y corte de árboles) y el hábitat de especies que viven en el cerro. Algo similar ocurre en el transporte del recurso extraído, para lo cual se utiliza maquinaria con gran capacidad de carga como volquetas, plataformas y otros que al salir de la cantera 1 y 2 (que también es el camino de acceso a la comunidad “La Mesa”), (i) hacen un ruido insoportable, por el funcionamiento de las máquinas; (ii) dejan polvillo y material particulado disperso en el aire, producido por la explotación; (iii) generan afecciones a la salud, en especial tos, ojos irritados y molestias en sus oídos. Así mismo, se hace énfasis, que, en la extracción antitécnica de material, los operadores de maquinaria desde la parte más alta (25 metros o más) de las canteras 1 y 2 (cerro la Chuva) arrojan material para que sea más arenoso, levantando grandes cantidades de polvo, causando gran ruido y en algunas veces las piedras arrojadas llegan a espacios públicos como la carretera de acceso a la comunidad “La Mesa”. En concreto, se ha destruido más de nueve hectáreas del cerro “La Chuva” y al momento mucho material extraído. (...) y que conforme la Agencia de Regulación y Control Minero, SENAGUA, GAD Municipal de Piñas, esta actividad no estaría autorizada-concesionada por el Estado que es dueño de estos recursos, es decir no existe ningún permiso ni licencia para realizar esta actividad, lo que lleva a la prenombrada autoridad a calificar la explotación como minería inconstitucional y prohibir la actividad. En cuanto al agua.- (...) de continuar con la expansión y explotación de la cantera de material pétreo, especialmente en el rumbo Sur, las fuentes hídricas existentes en el sector, que proporcionan de agua para las actividades domésticas y agropecuarias de los moradores de los sitios el Portete y la Mesa, tienden a desaparecer”, (...) se puede apreciar que en la cantera 1 y 2 del cerro “La Chuva” existen ojos de agua destruidos por la explotación, brota agua desde el suelo por el movimiento de tierra que se ha hecho, existen zonas húmedas de la cantera que creemos es parte del caudal ecológico del cerro. En cuanto al suelo.- (...) se aprecia gran número de grietas de longitud extensa: (i) alrededor de las canteras, (ii) fuentes de agua (iii) inmuebles de comuneros/as. Esta circunstancia amenaza en que parte del cerro pueda deslizarse hacia las comunidades aledañas a las canteras, tapar caminos de acceso, fuentes de agua, (...) esta comunidad tienen que sufrir un calor excesivo, lodo (dependiendo de la época), polvo, soledad, tristeza y miedo al transitar por las canteras y percibir la magnitud del daño y destrucción provocada.”, en el marco de la demanda planteada, tenemos que la parte accionante, sin estar obligada a la demostración de los hechos alegados, ha actuado prueba, superior a la que han presentado la parte accionada. Para establecer la existencia de los daños citaremos principalmente los siguientes elementos de prueba, en orden de relevancia: a) Los testimonios de los moradores: MARIBEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, moradora, llegaba demasiado polvo, era intransitable, y las volquetas andaban a exceso de velocidad, y se han afectado las tomas de agua, y es peligroso andar por ahí, y se ha incrementado el calor, son 17 familias en crecimiento. ROSA MAGALY AGUILAR AYALA, Yo he visto hace años que extraen el lastre y vía a las antenas, la captación del agua, se ha mermado, la misma que se ha cogido por años, con la extracción del lastre del material se

reduce el agua. LEONARDO APOLO TORRES.- La explotación nos ha afectado la calidad de vida, el agua que se está secando. b) El Informe Técnico de visita realizado a la comunidad La Mesa, cantón Piñas de la provincia de El Oro, debido a la actividad de extracción minera” elaborado en fecha 5 de marzo de 2020, por el equipo técnico conformado por Ingenieros miembros de “Metallura Equipo de Gestión Ambiental”, con base a la visita realizada a la zona afectada por la mencionada extracción de áridos y pétreos y zonas aledañas los días 29 de febrero y 1 de marzo del presente año. Este archivo se encuentra en formato digital en un CD, y de sus testimonios, se extrae principalmente lo siguiente: LUIS ARMANDO CURILLO CHILLOGAZO, Ing. Agr. Andino, encontramos diversidad de animales, flora y fauna, aplicaron el método de la observación técnica, existe un desequilibrio de las especies que migran y desaparecen, y una gran alteración al paisaje. ING. JOSSELIN MUENTES, Que es necesario la conservación y cuidado del agua, que existe afectación por el ruido. El suelo participa en el efecto hidrológico y que se afecta por la explotación del suelo, produciendo un impacto negativo. ING. MARIELISA MUÑOZ TELLO, hallazgo, impacto visual, alteración en el cerro, con alteración grande. Alteración de las captaciones de agua y contaminación en el aire. Existe huellas de carbono. El suelo está perdiendo su capacidad de absorción, lo que afecta a los animales e indirectamente a las personas. c) El testimonio del Analista Social C.A.C.Z. D.H. P-C. De la Secretaría del Agua Ing. WILLIAM JAVIER JARAMILLO RUIZ, quien suscribió el documento que obra de fojas 129 a la 132, manifiesta que se encontró captación seca cerca de la zona de explotación y 2 captaciones de agua, se determina que, de continuar con la vía por ese sector, se podría afectar la captación Portete, y si los trabajo continúan la captación de agua La Mesa, puede afectarse esa captación. d) El testimonio del ING. RAÚL GAONA G. Técnico R.H. C.A.C.Z. D.H. P-C. de la Secretaría del Agua, quien suscribió el Informe de fecha 06/02/2020 SENAGUA, se pudo determinar que en el ramal de la quebrada “La Mesa” habían aperturado una rampa por minería, a cielo abierto, habiendo una afectación con escombros por explotación minera. Existen dos tomas de agua “La Mesa” y “Portete”. Peligra su permanencia, y como no tienen un plan, están potencialmente en peligro, por la explotación. Efectos: Deforestación y pérdida del agua. e) El testimonio del PERITO AMBIENTAL, ING. JAIME ESPINOZA V.- En estas dos áreas se observa la degradación por actividades extractivas. Se encontraron dos puntos de captación de agua “La Mesa” “Portete” así también pasivos ambientales (material acumulados), no existen zonas concesionadas, según el catastro, siendo una explotación ilegal, existe explotación anti técnica, sin bermas de seguridad. AFECTACIÓN BIÓTICA (Flora) no existe debido a su explotación. Se trata de un ECOSISTEMA FRÁGIL, está dentro del área de influencia. FAUNA, no se puede apreciar porque se encuentra totalmente intervenida. Existen 2 abastecimientos de agua para consumo humano. Se observa afloramientos de aguas subterráneas; de seguirse las actividades se podrían alterar las fuentes de agua. El polvo que genera la actividad de explotación, puede causar sedimentación en las fuentes de agua o influir en los afloramientos del agua. En relación al aire no se pudo determinar, porque al momento de la inspección, no existía actividad de explotación. El suelo, es el que recibe el mayor impacto, por el desbroce de la vegetación, y se encuentra sin cobertura vegetal, como recomendaciones principalmente señala estabilizar los taludes, realizar actividades de revegetación entre otras. f) A esto se acota el CD-R., en el que constan archivos en fotos y videos en relación a la extracción de materiales del cerro “La Chuva”, destrucción del cerro y demás hechos narrados en la acción. Con los medios de pruebas citados, tenemos que se llega a probar la existencia del daño demandado desde quienes lo padecen, que son los testimonios de las moradoras que habitan y conviven con esta realidad de forma permanente, y durante todos los años de su vida, y quienes hacen conocer en sus testimonios que les ha afectado el polvo, y que las captaciones de agua, de las cuales dependen directamente, se están secando, por la actividad extractiva que se realiza al pie de las mismas, y la desolación del lugar, por la presencia de las canteras. La parte accionante también presentó

el Informe y sustentación del equipo técnico conformado por Ingenieros miembros de “Metallura Equipo de Gestión Ambiental”, quienes técnicamente han realizado un análisis, con base a la visita realizada a la zona afectada por la mencionada extracción de áridos y pétreos y zonas aledañas los días 29 de febrero y 1 de marzo del presente año, y de la cual llegan a deducir en sus conclusiones, que existe un desequilibrio a la biodiversidad del ecosistema, alteración del paisaje, afectación por el ruido, un grave impacto en el suelo y las captaciones de agua, que se tiene en el sector. Los ingenieros WILLIAM JAVIER JARAMILLO RUIZ, y RAÚL GAONA G. Técnicos R.H. C.A.C.Z. D.H. P-C de la Secretaría del Agua, quienes también han visitado el lugar de los hechos, han sido claros en sus conclusiones, al indicar la existencia de las captaciones del agua, de las que dependen directamente las comunidades de “La Mesa” y el “Portete”, refiriéndose a que “peligra su permanencia, y como no tienen un plan, están potencialmente en peligro, por la explotación. Efectos: Deforestación y pérdida del agua”; lo cual constituye una evidencia palpable del daño y hechos demandados. A estas pruebas y de igual relevancia, se le suma una prueba pericial practicada por el Ingeniero Jaime Espinoza Vincas, Perito Ambiental, con número de calificación 1267391, designado mediante el sorteo de peritos del SATJE, el mismo que en compañía de las partes procesales y del juzgador, en una Inspección judicial recorrió toda la zona afectada, y cuyo informe fue discutido en la Audiencia Pública por todas las partes procesales e involucradas en los hechos demandados, en base al principio de contradicción. Pericia con la que se logra determinar, que se ha realizado una explotación ilegal, por cuanto no se encuentra concesionado el lugar de explotación; que viene siendo realizada desde hace más de 10 años, anti técnica, tiene taludes verticales de más de 40 metros de altura, sin respetar ninguna medida de seguridad, no cuenta con bermas, señalización; que el área afectada tiene un ecosistema frágil, y el perito al realizar un diagnóstico ambiental de los factores ambientales bióticos, ha indicado que la “zona se encuentra totalmente intervenida por las actividades de explotación de materiales pétreos”, es decir la zona se encuentra devastada totalmente, que ni siquiera se puede realizar una valoración de este componente. En torno a los componentes abióticos, refiere que existen captaciones y ojos de agua en el sector, los que podrían recibir efectos por la explotación, en cuanto a modificarse y alterarse, al igual que las aguas subterráneas. El aire, al no existir actividades al momento de la inspección, no se ha podido valorar su calidad, sin embargo, señala que el polvo puede causar sedimentación en las captaciones del agua, y que el suelo, presenta la mayor afectación negativa, al quedar totalmente descubierto, y con pasivos ambientales, recomienda que se debe “identificar a los responsables de los daños ambientales ocasionados”. De esta forma, se prueba pericialmente el daño a la naturaleza, y por ende la afectación a los derechos de la naturaleza, en toda su extensión, circunscrita al Cerro La Chuva, así como también los derechos constitucionales de las Comunidades de “La Mesa” y el “Portete”, quienes se ven afectados al derecho a la salud, al ambiente, al agua, y el buen vivir, como lo manda el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador. En este escenario probatorio, tenemos que no puede haber duda alguna, de que existe una afectación a los derechos de la naturaleza, y de las personas que habitan en el lugar, y que han ejercitado esta acción. Aquí no se comparte la suposición de los entes accionados quienes, sin mayor esfuerzo en las cosas, se han limitado a señalar que no existe vulneración de derechos constitucionales, y que son cuestiones de legalidad, sin presentar medios probatorios, y sobre quienes recae directamente la obligación de probar. 2.2. Probado el daño, amerita que se señale los causantes, o como se origina este; de acuerdo con lo hasta ahora probado, tenemos que existe un daño como se menciona en la demanda constitucional, pero esto no constituye un todo, sino que también requiere un análisis, de su origen del ente que lo ocasiona, y para llegar a establecerlo, no puede hacerse de forma subjetiva, sino en elementos debidamente comprobados, y que en la especie existe el suficiente material probatorio, para discurrir esta parte de la segunda pregunta planteada, y que existen varios, pero se citarán lo más relevantes a criterio del

juzgador. a) Los testimonios de los moradores: ÁNGEL MARÍA ORTEGA.- Siempre han extraído material del cerro, de forma rústica y ahora con maquinarias, lo han realizado los GAD de Piñas, Prefectura, y también particulares. RAQUEL AGUILAR ORTEGA.- Desde el año 53 en adelante se extrae el material, de forma rústica y ahora con maquinarias, la explotación la hacen entidades públicas, las identifico por que los vehículos por sus placas. La captación del agua, ha mermado bastante, el polvo les afecta. AGUILAR ORTEGA CESAR LUIS.- Se veía trabajar al Ministerio de Obras Pública MOP., GAD de Piñas, GAD Prefectura, trabajaban los públicos de lunes a viernes, y los privados trabajaban hasta el domingo. HINOJOSA AGUILAR ROMERO.- desde hace 20 años, se ha realizado la explotación en jornada completa por los GAD de Piñas, GAD Prefectura y particulares. AGUILAR ORTEGA JUAN PABLO.- Se ha realizado la explotación por parte de los GAD de Piñas, GAD Prefectura, MOP, en horarios de trabajo, la extracción afecta con el polvo, y resta el caudal de la quebrada, un ojo de agua lo taparon con tierra y otro ojo de agua lo taparon con material. MAGALY AGUILAR AYALA.- Realizan la explotación con maquinaria pesada, son del GAD de Piñas, GAD Prefectura, y esto afecta a las captaciones de agua. b) Testimonio del ALCALDE del GAD. Municipal de Piñas JAIME GRANDA ROMERO, de cuyo testimonio principalmente se extrae lo siguiente: desde hace más de 60 años, se han explotado esas canteras, por parte del GAD de Piñas, GAD Prefectura, y el MOP. Se encuentran paralizados en sus trabajos en vialidad rural, porque no hay de donde explotar material, tomamos material que se riega, refiere haber comprado material. Y que la explotación también la realizan el señor Ángel Torres y Peña. c) CD, certificado mediante documento físico original suscrito por su creador Señor Carlos Espinoza Macas periodista de la radio “Radio Impacto”, información contenida en CD donde consta tres archivos con contenido audiovisual pertinente a los hechos de esta acción, el mismo que contiene declaraciones públicas hechas por el alcalde del cantón Piñas sobre la explotación de las canteras del Cerro La Chuva. d) El testimonio del señor ÁNGEL GERÓNIMO TORRES LÓPEZ, TERCERO INTERESADO.- Desde hace 80 años y más se ha venido explotando. Son 3 lotes de toda la cantera. El GAD de Piñas. GAD de la Prefectura, siempre han sacado para el beneficio del pueblo. Desde el 2015 realizo explotaciones. Yo no vendía material al GAD de Piñas, GAD de la Prefectura de El Oro, Ministerio de Obra Públicas, MOP., el GAD Provincial metía tractores y volquetas para sacar material, El GAD de Piñas, GAD de Prefectura venían realizando la explotación y también particulares. e) Convenio de la Mancomunidad entre el GAD. Provincial de El Oro y GAD. Municipal Piñas. En análisis de la prueba que ha sido presentada en este apartado, y que se vincula con la explotación del material pétreo, extraído del Cerro La Chuva, implicaría establecer la responsabilidad de quienes han causado el daño, y que constantemente han estado en aprovechamiento de estos recursos naturales; públicamente y en su testimonio el Alcalde del GAD Municipal de Piñas Jaime Granda, ha reconocido que el GAD Municipal de Piñas, el GAD Provincial de la Prefectura de El Oro, el Ministerio de Obras Públicas, el señor Ángel Torres, el señor Peña, estos últimos que también comparecieron al proceso con un Amicus Curiae, y personas particulares; son quienes vienen realizando estas actividades extractivas, lo cual se corrobora con el testimonio del señor Ángel Torres, quien ha sido muy puntual, al mencionar que tanto él, el señor Peña, como el GAD Municipal de Piñas, GAD Provincial de la Prefectura de El Oro, y el Ministerio de Obras Públicas, son quienes han estado explotando en estas canteras, y que no les realizaba ventas de material pétreo. Los moradores de las Comunidades de La Mesa y el Portete, mencionan también en sus testimonios, que en las canteras, se veía en horarios de trabajo normales de lunes a viernes, la maquinaria y volquetas del GAD Municipal de Piñas, y del GAD Provincial de la Prefectura de El Oro, quienes llevaban los materiales pétreos; y todos estos sin contar con los respectivos títulos habilitantes de concesión y/o aprovechamiento como entidades públicas o privadas, sin contar con un plan de manejo ambiental, y sin respetar normas técnicas, simplemente basados en una supuesta costumbre de explotar una cantera, de la cual tanto los moradores y usufructuarios

reconocen que ha sido por más de 60 años, y que esa explotación indiscriminada sin lineamientos técnicos de explotación y reparación, es la que está privando de sus derechos a la naturaleza, como también a los habitantes de las Comunidades de La Mesa, y el Portete, dejando graves secuelas y que de pronto podrían ser irreversibles. En este contexto, tenemos que se ha probado el daño, y como tal la vulneración de derechos constitucionales, de los entes accionantes, y en la misma línea de análisis resulta pertinente señalar que son los accionantes, quienes principalmente han actuado prueba, y que los organismos accionados, han tenido una mínima participación probatoria, por decir lo menos, desconociendo con su actuar procesal, lo que dispone el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador “Se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información.”; es decir que la carga de la prueba le corresponde a la parte accionada en su doble dimensión constitucional, tanto como entidad pública demandada por una acción de garantía constitucional acción de protección, y por tratarse de un daño ambiental, que como lo refiere el numeral 1 del artículo 397 ibídem dispone “La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado”; a pesar de estos mandatos constitucionales poco o nada, se ha realizado por parte de los accionados, para demostrar la inexistencia de los hechos atribuidos en su contra en la demanda constitucional, al contrario de esto, sus defensas se reducen a tratar de descalificar las pruebas presentadas por los accionantes, entre estas la pericial, pero a la luz de la sana crítica, y de la apreciación de las pruebas en su conjunto, observamos que el cúmulo de estas, nos permiten tener una visión clara del problema a resolver, en un alto grado de convencimiento en el juzgador, y que se ha probado la conculcación de derechos, como se demanda constitucionalmente.

2.3. Los polos alrededor de los cuales gira la responsabilidad del daño a los derechos de la naturaleza y de las personas, evidencian una vulneración de derechos constitucionales, y que sin lugar a dudas a generado un pasivo ambiental, y que dicha realidad va más allá de las posturas que puedan tener las entidades públicas del GAD. Municipal de Piñas, y del GAD Provincial de la Prefectura de El Oro, en relación a indicar que debe primar un bien colectivo mayor, al de las Comunidades de La Mesa y el Portete, sosteniendo que los materiales pétreos, fueron utilizados para obras de la ciudadanía, ya que si bien es cierto son actividades convencionales que están contempladas dentro de sus competencias, pero deben sujetarse a las disposiciones constitucionales y legales que la rigen, y que en su ejecución no puede justificarse como correctas, cuando van causando el daño o afectación a derechos constitucionales. “Los daños al ambiente en sí mismos, son aquellos que no dependen de la afectación concreta a la salud, vida o bienes de los seres humanos. En cambio los daños que por reflejo de ese ambiente deteriorado se transmiten y representan como daños concretos en las personas y en sus bienes” (Morales Lamberti, 2008, pág. 12). En la especie tenemos que se cumplen ambos, el daño al ambiente, como son el suelo con la destrucción de su corteza terrestre, en muchas capas, la vegetación, y también los seres que habitan en ella; y, por reflejo a los habitantes de las Comunidades accionantes, quienes sufren afectación directa en las captaciones de agua, que están perdiendo su caudal, corriendo el riesgo de desaparecer, el polvo que se genera con la actividad extractiva, afecta a la salud de las comunidades, el lugar de tránsito o acceso hacia las comunidades constituye un constante peligro, el incremento de las temperaturas en el sector que esta desolado, una afectación visual por la desaparición del cerro La Chuva, cuestión que no es una exageración, ni alarmismo, se puede constatar fácilmente desde la vía Panamericana que conduce de Piñas a Portovelo. El ejercicio intelectual [constantemente requerido por la Corte Constitucional, en sus resoluciones], para establecer la existencia, de la vulneración de derechos tutelables mediante la garantía constitucional activada, nos conduce a señalar que la acción de protección, como la consagra la Constitución del Ecuador, en el artículo 88, “tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una

vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; (...) o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. Los hechos expuestos en la acción se presumirían ciertos, hasta que la parte accionada no demuestre lo contrario, esto por mandato constitucional; por lo que luego de haberse evacuado la respectiva Audiencia pública, el juzgador con conocimiento de causa, puede señalar que el objeto que persigue la acción de protección el amparo directo y eficaz de los derechos, se verifica en la causa; ya que el único mecanismo viable, de defensa que le asiste a los accionantes es la acción de protección, dada las circunstancias de los hechos que generan la vulneración de sus derechos y de la naturaleza (el GAD. De Piñas, el GAD. De la Prefectura de El Oro, y particulares, con sus actividades extractivistas), que lógicamente son de raigambre constitucional, y que la forma de protegerse, es haciendo uso de las instituciones constitucionales, que el legislador de Montecristi previó. La vulneración de derechos constitucionales, en el caso sub judice se refleja en la falta de respeto integral de la existencia, mantenimiento, y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza, éste como eje transversal de los derechos del buen vivir, la salud, al agua de las personas habitantes de las Comunidades La Mesa y el Portete; todos estos se fragmentan, cuando sin ningún tipo de autorización o concesión, es decir en forma arbitraria, han estado explotando el material pétreo del cerro La Chuva, sin resarcir los daños causados, ante una extracción de una minería ilegal que no le franquea ninguna garantía, y violenta los derechos arriba enunciados, y con lo cual se constata la vulneración constitucional de sus derechos, por parte de la autoridad pública, no judicial, hechos debidamente comprobados con la prueba actuada en Audiencia Pública. La Constitución ecuatoriana del 2008, establece: Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. Rubén Martínez Dalmau contextualiza este desarrollo constitucional, señalando: “El avance en el reconocimiento de la titularidad de la Naturaleza como sujeto de derechos es uno de los pilares de la transición ecológica y de la búsqueda de una relación armónica entre el ser humano y la Naturaleza. Implica necesariamente un cambio de paradigma en el pensamiento jurídico.” Este tan nombrado cambio de paradigma, nos centra en la visión que se debe tener sobre los derechos de la naturaleza; es necesario identificar que el daño ambiental que aqueja a la naturaleza y a las personas como parte de este sistema, tiene también otras vías que tutelan este bien protegido, en esfera civil, penal, y administrativa pública, que podrían haber actuado, ante el daño causado, pero la respuesta a que los hechos demandados, puedan ser tratados en la acción de protección, es porque se han rebasado esas esferas, y que tampoco han sido accionadas, por quienes tenían competencia para hacerlo, pero que la justificación radica, en que existe una vulneración de derechos constitucionales a la naturaleza. La naturaleza tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, derecho de este sujeto la naturaleza, que ha sido violentado claramente por entes públicos como por particulares, y que dicha hipótesis ha quedado contrastada con la pericia ambiental del Ingeniero Espinoza Vínces, quien científicamente ha logrado determinar la existencia del daño ambiental, y que al existir este daño se comprueba que con el accionar extractivista del GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro, y de los ciudadanos Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, tenemos que no se ha respetado su existencia, hasta el punto de haber hecho desaparecer la fauna, ya que en el informe pericial,

describe que “no se logra identificar, ni observar, especies de fauna, ya que la zona se encuentra totalmente intervenida por las actividades de explotación de materiales pétreos”, algo similar ocurre con la flora, ya que al tratarse de un ecosistema frágil y al encontrarse totalmente intervenida la zona, lógicamente desaparece; los componentes abióticos resultan también gravemente afectados, el agua, sus vertientes existentes de las cuales se tiene el aprovechamiento para las Comunidades de “La Mesa” y el “Portete”, se han disminuido notablemente, y podrían desaparecer, en caso de continuarse con las actividades extractivas; el aire, sufre también alteraciones, por las partículas y componentes que se producen con la explotación de materiales pétreos, y otro componente abiótico, también afectado gravemente en forma negativa, el suelo, ya que con el desbroce de la vegetación y la extracción del material del cerro La Chuva, en un alto porcentaje se ha explotado el suelo. Desde luego no se ha respetado su existencia, y mucho menos los extractivistas, han ejecutado el mantenimiento y regeneración de los recursos naturales, y como tal constituyen un derecho constitucional, aspiración que recoge la demanda constitucional, y que en los términos que se ha venido realizando la explotación, sin una visión técnica, y sin un plan de manejo ambiental, es evidente que existe la vulneración de los derechos constitucionales de la naturaleza, como sujeto de derechos, plenamente reconocidos en el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador. La pregunta sobre la existencia de vulneración de derechos constitucionales, también nos orilla a reflexionar sobre los derechos de las personas, que también sufren las consecuencias de la explotación de los materiales pétreos del cerro La Chuva, y que la doctrina los identifica como daños por reflejo; y quienes demandan como violación constitucional de las “Comunidades “La Mesa”, “El Portete” y las generaciones futuras: Categoría de derechos del Buen Vivir: ambiente sano y ecológicamente equilibrado; salud; agua y alimentación; hábitat seguro y saludable, desarrollo sostenible y seguridad humana; Categoría personas y grupos de atención prioritaria: atención preferente y especializada por parte de los poderes públicos y privados. Categoría derechos de libertad: derecho a una vida digna, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad formal y material, libre desarrollo de la personalidad, derecho a dirigir quejas y peticiones, derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. Categoría derechos de protección: derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos e intereses, derecho al debido proceso (debido procedimiento administrativo), derecho a la motivación, derecho a la seguridad jurídica. Categoría derechos de participación: participar en los asuntos de interés público; derecho a la consulta ambiental. En cuanto a las generaciones futuras: derecho al desarrollo sustentable, derecho a un futuro seguro, derecho a una justicia intergeneracional, ecológica y climática, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al agua, derecho al hábitat seguro y saludable, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a una tierra preservada, derecho a la libertad de opción, derecho al desarrollo individual y colectivo sobre la tierra, derecho a la seguridad jurídica”. La tesis que plantean los accionantes, sobre la violación de derechos constitucionales, guarda relación con los medios probatorios presentados en la Audiencia pública, y que el plexo constitucional los reconoce como derechos plenamente justiciables, la violación de los derechos constitucionales surge a raíz de la explotación permanente e ilegal del cerro La Chuva, por parte de los entes autónomos accionados y los particulares. En este escenario, tenemos que la malla de derechos constitucionales argumentada por los accionados, presenta una vulneración, y que su grado de afectación e importancia los ubica dentro de la protección que deben tener en el ámbito de la acción de protección, como mecanismo inmediato para frenar su violación. El derecho al buen vivir, como eje transversal de todo el contrato social ecuatoriano, contiene declarativamente derechos constitucionales, que buscan asegurar la protección del ser humano en una convivencia armónica con la naturaleza, y garantizar su existencia, como la de las generaciones futuras. Los cuatro elementos esenciales para la vida, son el aire, el agua, la tierra y el fuego

según los griegos. El agua también constituye un derecho humano. “El agua es la esencia de la vida. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, y fundamentales para la dignidad de toda persona. Sin embargo, 884 millones de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable, y 2.500 millones no disponen de servicios mejorados de saneamiento” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y Organización Mundial de la Salud, Progress on Drinking Water and Sanitation: Special Focus on Sanitation (2008)). Para la Constitución de Montecristi, “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida” (Art. 12 CRE.) enfocado el derecho constitucional, de lo que se trata e implica, vemos que su goce para los habitantes de las Comunidades de “La Mesa” y “El Portete”, se ve violentado por las actividades de explotación de materiales pétreos, actividad que como lo mencionan los técnicos de la R.H. C.A.C.Z. D.H. P-C de la Secretaría del Agua, ingenieros WILLIAM JAVIER JARAMILLO RUIZ, y RAÚL GAONA G. el agua peligra su permanencia, y está potencialmente en peligro por la explotación que se realiza del material pétreo, causándose pérdida del agua, lo que fue demostrado con la pericia del Ingeniero Espinoza Vincés; el agua para estas Comunidades es vital, ya que es de consumo humano, riego para sus huertos, y para crianza de sus animales, es necesario destacar que no cuentan con agua potable, y que el GAD. Municipal de Piñas, ha señalado que no puede proveer de estos servicios, ya que se encuentra fuera de sus competencias, al ser una zona rural; las reflexiones hasta aquí presentadas, buscan señalar que existe la vulneración al derecho constitucional al agua, y que no está en discusión la falta de provisión del servicio por parte del cabildo de Piñas u otra autoridad autónoma descentralizada, pero sí que existe una afectación directa, establecida técnica y pericialmente. La explotación del material pétreo denunciada, tiene como consecuencia también la contaminación del aire, ya que, al realizarse la actividad extractiva, se genera polvo y partículas, que viajan en el aire, y que de a poco van asentándose en las tomas de agua, lo que da lugar a que se formen sedimentos, al igual que causan afectaciones respiratorias en las personas del lugar, y que este también se levanta con el tránsito de volquetas y maquinarias, que participan en estas labores, lo que violenta el derecho constitucional al ambiente sano, como lo dispone el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, y como tal se vincula al derecho constitucional a la salud como lo consagra el artículo 32 ibídem, y que en el caso sub judice, han sido vulnerados, con las acciones extractivas del GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro, y de los ciudadanos Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo. 3) ¿Existe otra vía judicial más adecuada y eficaz para proteger los derechos constitucionales demandados? Antes de abordar la tercera pregunta capital, resulta pertinente ir fijando un análisis de cuestiones relevantes, que nos van a dar luces, para dar la respuesta adecuada tanto a la pregunta planteada, como al problema jurídico en sí; la contestación a la acción de protección, por parte del GAD. Municipal de Piñas, en la persona de su Procurador Síndico, en la que se narra los hechos, expuestos con argumentos jurídicos sin relevancia, que le sirven de fundamento a su contestación a la demanda, en la que principalmente hace referencia a que: “no están de acuerdo con la acción presentada por la comunidad “La Mesa”, como es la suspensión definitiva de la explotación del cerro “La Chuva” , ya que no se va a poder lastrar las vías, con esto se afecta al interés colectivo y general el cual prevalece sobre el interés particular , señor juez nosotros estamos prohibidos de invertir en el sector rural, la disminución del caudal del agua es un asunto en todo el país, señor juez las peticiones de las comunidades “La Mesa” no son de competencia de GAD Municipal, señor juez el Municipio de Piñas tiene un déficit de más de Seiscientos Mil Dólares en el segundo semestre, señor juez produzco diez pruebas documentales como son expediente administrativo en el cual se le concede al señor Ángel Torres autorización para explotar material aurífero en el cerro la Chuva, así mismo el permiso al mismo señor para explotar material en el sitio la

mesa por seis hectáreas por un tiempo de diez años; tenemos un oficio del señor Ángel Torres, para que se rectifiquen las coordenadas lo cual no se ha podido hacer por estar cerrado el castro minero”. Así también la defensa del Ministerio del Ambiente y Agua, en su contestación a la demanda señala: “así mismo consta un informe de la antigua SENAGUA, se recomienda que las entidades como son el GAD Municipal de Piñas para que tome asunto en la explotación ilegal mediante oficio; los accionantes deberían haber señalado las trasgresiones por mi defendida para que se defiendan de los mismo lo cual no lo han realizado por lo que la presente acción de protección sería improcedente ya que existen vías administrativas para reclamar los supuesto derechos violados.”. En este mismo orden de ideas, tenemos que el artículo 17, numeral 2, de la LOGJCC., establece que en el contenido de la sentencia, se debe hacer alusión a la “relación de los hechos probados relevantes para la resolución”, en el caso sub judice tenemos que la carga de la prueba le corresponde a la entidad accionada, ya que el numeral 3 del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “se presumirán ciertos los fundamentos alegados por la persona accionante cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre información” por lo que en base a esta temática, las consideraciones y orientaciones de la parte accionada, deben estar enfocadas, a que no existe la vulneración alegada, y que puesto en la lupa, cuál debe ser la actuación; tenemos que la parte accionada, no ha aportado con hechos relevantes que constituyan prueba, y que demuestre que los fundamentos alegados, son falsos o que no existe la vulneración alegada, ya que lo único que se ha sostenido, es que existe otra vía judicial, -la administrativa-, y que es un asunto de mera legalidad; situación que va a ser analizada a continuación. Adentrándonos en resolver la pregunta planteada, estimo pertinente ir puntualizando el escenario jurídico constitucional, que encierra esta acción de protección, desde sus distintas perspectivas, al respecto empezaremos por citar lo que sostiene Jorge Zavala Egas, en la parte Introductoria del Libro “Sobre Neoconstitucionalismo, Principios y Ponderación”, tenemos que adoptar el criterio de que las normas pueden expresarse como reglas y como principios advirtiéndose, que el Estado de derecho anterior al Estado constitucional contemporáneo era algo cualitativamente distinto, pues se estructuraba y manifestaba como derecho por reglas, mientras que ahora se trata de un derecho por principios, lo cual tiene directa y trascendental importancia para la potestad jurisdiccional. Es decir que con este nuevo paradigma queda superado, la cuestión legalista, (la ley es la ley, y está por encima hasta de la constitución) y nos adentramos a un constitucionalismo vivo, como lo señalan los estudiosos del neoconstitucionalismo. En relación a lo manifestado por la parte accionada, voy a referirme a la cuestión jurídica que tiene que ver, en cuanto a la vía judicial de ejercer la acción, y en cuanto a los aspectos que deben de ser valorados para su aceptación como tal; al respecto la Corte Constitucional en Sentencia No. 016-13-SEP-CC emitida en el caso No. 1000-12-EP, señaló: ... la acción de protección es la garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración a derechos constitucionales, con lo cual, no existe otra vía para la tutela de esos derechos que no sean las garantías jurisdiccionales. No todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tienen cabida para el debate en la esfera constitucional ya que para conflictos en materia de legalidad existen las vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria. El juez constitucional cuando de la sustanciación de garantía jurisdiccional establezca que no existe vulneración de derechos constitucionales, sino únicamente posibles controversias de índole infraconstitucional puede señalar la existencia de otras vías. El razonamiento que desarrolla la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece que la acción de protección procede cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado (énfasis fuera de texto). En la sentencia No. 041-13-SEP-CC dictada dentro del caso No. 0470-12-EP se expresó también: La acción de protección no constituye un mecanismo de superposición o reemplazo de las instancias judiciales ordinarias, pues ello ocasionaría el desconocimiento de la estructura jurisdiccional estatal establecida por

la Constitución (...) no sustituye a todos los demás medios judiciales pues en dicho caso, la justicia constitucional pasaría a asumir potestades que no le corresponden, afectando la seguridad jurídica de los ciudadanos y desvirtuando la estructura jurisdiccional del Estado y desconociendo la garantía institucional que representa Función Judicial. De esta forma la Corte Constitucional desagrega conceptualmente y de forma vinculante en sus sentencias, cuando es que se debe dar paso a una acción de protección, cuya cuestión jurídica, ha dejado de ser un asunto de justicia ordinaria, y que bajo, la óptica del nuevo Pacto social del Ecuador, se confirió a las personas, una forma de activar un mecanismo directo y eficaz que permite reparar e incluso, suspender la vulneración de derechos constitucionales. Es por esto, que desde ese matiz, que implica un cambio de paradigma, la Corte Constitucional, en su desarrollo jurisprudencial, menciona varios requisitos de procedibilidad, que se deben de considerar, de forma obligatoria, como un filtro, para que el activar estos mecanismos constitucionales surtan los efectos que el legislador quiso prever, cuando normó las garantías jurisdiccionales, el no seguir esta hoja de ruta conllevaría a que los jueces constitucionales, traten sobre asuntos ordinarios y en otros casos las nieguen por no estar dentro del ámbito constitucional. Dicho esto, resulta relevante citar que el Pleno de la Corte Constitucional en su sentencia No. 016-13-SEP-CC dictada dentro del caso N.º 1000-12-EP, manifestó: "... que la acción de protección procede cuando exista vulneración de derechos constitucionales y que esta lesión debe ser verificada por la jueza o juez constitucional en cada caso concreto, es decir ratificando que el análisis sobre el cual gira la procedencia de la acción de protección no es una confrontación abstracta, sino que nace de circunstancias específicas". La justificación de la presente acción de protección, en relación a las circunstancias específicas del caso concreto, nos han llevado a concluir, que no se trata de una cuestión de legalidad, ni de hechos administrativos, que deban ventilarse en áreas ordinarias del derecho común, sino que existe demostrado jurídicamente una vulneración de derechos constitucionales, y que existe una actuación limitada del órgano competente (GAD Municipal de Piñas), quienes se han hecho al margen y que con sus acciones también han incurrido en la mencionada vulneración, como quedó destacado en líneas anteriores, para lo cual se confrontarán las siguientes cuestiones: El GAD Municipal de Piñas, asumió la competencia de regular la explotación de materiales áridos y pétreos, mediante Ordenanza No. 34, publicada en el Registro Oficial del 24 de noviembre del 2015, Ordenanza, en la que si bien es cierto asume las competencias de regular y controlar esta actividad, en su objeto dispuesto en el artículo 1, no menciona que asuma la competencia de sanción para conocer la vulneración de los derechos de la naturaleza, así también dentro de sus competencias, no consta que tenga la facultad coercitiva, para exigir el mantenimiento y regeneración de la naturaleza, es decir, de resarcir el daño causado por estas actividades. No se discute de fondo una legalidad, sino la vulneración de derechos constitucionales, como ha quedado expresado; es importante distinguir esta cuestión, ya que, se alega que el señor Ángel Torres López tiene la concesión, sin embargo, es de propio conocimiento de la entidad accionada, y que ha quedado probado en este proceso, no existe concesión en los espacios explotados, ya que el mencionado ciudadano tiene una concesión en otro lugar, y que en derecho público no pueden darse interpretaciones de las que se expresan en los documentos de autoridad competente, se alega un supuesto error, empero esto tampoco constituye una autorización de explotación fundamentada en una expectativa de un derecho, y de igual forma y en las mismas condiciones, el GAD. Municipal de Piñas, el GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro, y los ciudadanos Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, no tienen concesiones, permisos, ni derechos de aprovechamiento, que justifique sus actividades. La teoría de defensa del GAD Municipal de Piñas, resulta contradictoria, [señor juez produzco diez pruebas documentales como son expediente administrativo en el cual se le concede al señor Ángel Torres autorización para explotar material aurífero en el cerro la Chuva, así mismo el permiso al mismo señor para explotar material en el sitio la mesa por seis hectáreas por un

tiempo de diez años] al respecto tenemos que se recibió el testimonio de la Ing. Melissa Paola Espinoza Ramírez, Directora de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Piñas, que informa: “No había permisos y procedimos a clausurar las canteras. Asumimos la competencia con la Ordenanza de la Explotación de Materiales Pétreos del GAD. de Piñas del 2015. CONTESTACIÓN REPREGUNTAS: No han iniciado acciones legales en contra de los que han explotado los recursos.”; es decir el GAD. De Piñas, tenía pleno conocimiento que se trataba de una explotación ilegal, ya que hizo su intervención por medio de la Comisaria ambiental, y que no existe una concesión en el lugar de explotación pétrea. El GAD. Municipal de Piñas, quien tiene cierta competencia en base a la Ordenanza No. 34 citada anteriormente, no ha sancionado a nadie pese a tener conocimiento del daño, como se constata con el testimonio de la Ing. Melissa Espinoza, y realmente no lo hace por no tener competencia, y tampoco podría sancionarse así mismo, como entidad vulneradora de los derechos de la naturaleza, y que en el cerro La Chuva, se ha realizado una extracción de materiales sin respetar normas técnicas y de seguridad básica, sin un plan de manejo y remediación ambiental, y que el haberlos infringido a los actuales momentos, no constituye propiamente un hecho administrativo de legalidad, sino una violación a los derechos constitucionales de la naturaleza y de las personas que habitan en las Comunidades del sector. Siendo así, la Corte Constitucional, en SENTENCIA No. 001-16-PJO-CC, emitida en el Caso No. 0530-10-JP, ha sido diáfana al sostener que: La verificación de lo anterior permite calificar a la acción de protección como la vía adecuada y eficaz para amparar el derecho vulnerado, pues las garantías jurisdiccionales en general y la acción de protección en particular, tanto por el fin que persiguen cuanto por la materia que tratan (dimensión constitucional de un derecho fundamental), constituyen instrumentos procesales diseñados para garantizar la supremacía de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos; por ende, son las vías jurisdiccionales idóneas para resolver sobre el daño causado como consecuencia de la vulneración de un derecho constitucional. Así, siempre que se esté frente a una violación de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales, y cuando la violación proceda de una persona particular, si la vulneración del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación, la vía constitucionalmente válida es la acción de protección. Pronunciamiento de esta Corte, que, contrastado a los fundamentos de la acción de protección, nos permiten concluir que de los hechos descritos en la acción, conllevan a señalar que existe vulneración de derechos constitucionales de la naturaleza al mantenimiento de sus ciclos vitales y regeneración, así como de las personas de las Comunidades de “La Mesa” y “El Portete”, afectados en el derecho constitucional al buen vivir, al agua, y al ambiente sano; cierto e incontrovertible, lo que amerita que mediante vía acción de protección, se tutelen estos derechos, ya que no se trata de una cuestión de legalidad, sino de una justificada intervención del juez constitucional. Así también que para establecer la procedencia de la vía constitucional, se ha realizado el correspondiente análisis, a partir de los requisitos contenidos en el Art. 40 de la LOGJCC, en sus numerales 1 y 3, como dos elementos que se complementan, y que en ese contexto, nos permiten establecer la procedencia de la acción, como lo ha referido la Corte Constitucional; y que en el caso sub judice, existe la violación de derechos constitucionales y ante esto no existe otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger los derechos violados; el término “adecuado” ha sido concebido como “apropiado a las condiciones, circunstancias u objeto de algo”, ello trae como consecuencia que el mecanismo invocado para reparar o detener la vulneración a un derecho sea el idóneo, apto para restaurar ese derecho, . Por su parte, la palabra “eficaz” significa que el objeto, medio, mecanismo, etc., sea capaz de lograr el objeto que se desea o persigue. Por tanto al activar la justicia constitucional por medio

de la acción de protección, el accionante está invocando el funcionamiento de un procedimiento sencillo, rápido, eficaz y oral (artículo 86 numeral 2 literal a de la Constitución de la República), ya que la conducta de la autoridad pública GAD. Municipal Piñas ha afectado, menoscabado, violentado el ámbito constitucional de su derecho a la defensa. B) CONSIDERACIONES FINALES DEL JUZGADOR. - La exigencia de un análisis jurídico constitucional, sobre la vulneración de derechos constitucionales, amerita un estudio pormenorizado siendo así tenemos que la Corte Constitucional en Sentencia 102-13-SEP-CC, Caso No. 0380-10-EP, publicada en el Segundo Suplemento, del Registro Oficial No 161 del martes 14 de enero del 2014 ha manifestado: “Asimismo, con el fin de guardar la coherencia lógica y material de esta interpretación condicionada, es preciso que se analice el contenido del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: “Art. 40.- Requisitos.- La acción de protección se podrá presentar cuando concurren los siguientes requisitos: 1. Violación de un derecho constitucional. (...)”. Considerando que el contenido del citado artículo guarda relación con presupuestos de procedibilidad (análisis de fondo del asunto controvertido), es preciso que se deje en claro que la verificación de dichos requisitos, por parte de las juezas y jueces constitucionales del país, procederá mediante sentencia racionalmente fundamentada, no de manera sucinta y tampoco mediante auto. En efecto, los numerales “1. Violación de un derecho constitucional y 2. Acción u omisión de autoridad pública o de un particular de conformidad con el artículo siguiente”, atañen a la naturaleza misma de la acción de protección, existiendo una identidad en el razonamiento desarrollado por esta Corte con respecto del análisis del numeral 1 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, efectuado en párrafos anteriores. Es decir, el juzgador solo podrá asumir un criterio sobre la existencia o no de la vulneración de derechos constitucionales, por parte de una autoridad pública y violaciones por parte de particulares, únicamente luego de indagar mediante un procedimiento sencillo, rápido y eficaz.”; esto guarda relación con el objetivo que debe tener un proceso, y que se resumen en garantizarles a las partes una verdadera “tutela judicial efectiva” [Art. 75 CRE], que según el tratadista ecuatoriano Jorge Zavala constituye: “En conclusión, la decisión del juez siempre es propia del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, sea el derecho protegido fundamental o no. Al ser así el rol del juez no se limita a solucionar litigios, sino a lograr que la prestación jurisdiccional sea idónea y, por ello, a impedir que la rigurosidad formal del proceso lo conduzca a prestar una tutela no efectiva. Su deber no es una decisión jurisdiccional, sino la prestación de una tutela judicial efectiva para todos los derechos de las personas”. En este escenario, tenemos que los derechos constitucionales de la naturaleza, y de las personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano, con todas las garantías que implica, no pueden estar reducido, a criterios aislados de quienes ejercen el poder local administrativamente, como quedó desarrollado anteriormente. En torno a que debe acudir a la vía administrativa, para ejercer una acción legal, ha quedado justificado que se trata de tutelar derechos superiores, ya que son derechos constitucionales los que se está afectando, en vista de que se ha causado un daño, que violenta derechos constitucionales, y como tal trasciende las cuestiones de mera legalidad, ni se trata de la residualidad o subsidiariedad de la acción. En el caso sub judice, la pericia e informes técnicos, evidencian una explotación de materiales pétreos ejecutada, sin condiciones mínimas afecta de forma directa, derechos constitucionales, lo que escapa a la competencia de la autoridad accionada (GAD Municipal de Piñas), quien no ha podido determinar responsabilidades y obligaciones, y que también se encuentra inmerso dentro de éstas, como en efecto se lo ha probado, y que rebasa de ser una simple cuestión de legalidad, al contrario es una vulneración de derechos constitucionales, sujeta a una acción de protección, ya que al inobservar las disposiciones legales vigentes, provoca violaciones constitucionales; esto último que no puede ser revisado por los jueces ordinarios, sino por un juez constitucional. Es necesario señalar que los accionantes acuden al ámbito constitucional para que se tutele sus

derechos; al respecto se considera que existe vulneración de derechos constitucionales en base al criterio de la sana crítica. La acción de protección es un mecanismo de origen constitucional encaminado a la protección inmediata de derechos fundamentales que violen o hayan sido conculcados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos señalados en la Constitución y en la ley. Así mismo es necesaria la presencia de ciertas condiciones para que la acción de protección, manera excepcional, proceda contra actos administrativos, tal como refiere el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, esto es, 1) violación de un derecho constitucional, 2) acción u omisión de autoridad pública, 3) inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado. Y, como lo refiere el artículo 41 ibídem procede contra 1) todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. Norma que es aplicable al caso concreto, ya que existen vulneración de derechos; y que en la vía ordinaria no existen los mecanismos suficientes y sobre todo idóneos para que los accionantes ejerzan sus acciones. Sin dejar de mencionar, que la Constitución de la República es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, tal como lo señala el artículo 424 de la Constitución de la República en relación al artículo 426 que establece que todos y todas debemos aplicar las normas constitucionales y sobre todo lo más favorable a la voluntad del constituyente, el artículo 1 de la norma suprema establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, y como tal se reconocen derechos y se reviste de garantías para poder ejercer estos derechos. El numeral 3 del Art. 11 de la Constitución de la República que señala: “3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte..”. y el numeral 5 del artículo ibídem de la norma suprema: “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”, por lo tanto toda persona y toda autoridad tiene la obligación constitucional de respetar los preceptos constitucionales y también se impone la obligación de adecuar todas las actuaciones bajo este marco constitucional de derechos y garantías, los actos de la administración pública, y por ende los de la autoridad municipal accionada, deben guardar armonía con la Constitución. El reciente reconocimiento a la ecuatoriana indígena waorani Nemonte Nenquimo, con el galardón al Premio Golman conocido como el “Nobel Ambiental”, quien ha emprendido una defensa por la selva amazónica, donde se asientan pueblos indígenas, y también se tiene reservas de petróleo; nos enseñan que los derechos de la naturaleza y de las personas que se sirven de ella, son realmente importantes, traspolando a nuestro caso de estudio, que el cerro La Chuva, las comunidades de “La Mesa” y “El Portete”, y quienes habitan en el sector aledaño a las canteras de explotación; canteras que según los accionados tienen más de 80 años, siendo extraídas, y que desde hace unos 15 años aproximadamente se ha realizado un crecimiento acelerado de su explotación, por parte del GAD. Municipal de Piñas, el GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro, y los ciudadanos Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, es lo que ha ocasionado un daño altamente grave, como lo califica el perito Espinoza, y que ciertamente constituye una vulneración de derechos constitucionales, como se ha explicado líneas atrás. Al haberse reconocido la vulneración de derechos constitucionales, es menester manifestar, que se dispondrá la respectiva reparación integral, la misma que será proporcional y tratará de compensar a la naturaleza, y en medida de lo posible vuelva a su estado anterior, y lo cual se revertirá favorablemente en las personas que cohabitan con este entorno natural. QUINTO: RESOLUCION. Luego de la argumentación planteada, como garantía de una tutela judicial efectiva, el operador de justicia concluye que las acciones del GAD. Municipal de Piñas, el GAD. Provincial de la Prefectura de El Oro, y los ciudadanos

Ángel Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, vulneran en forma directa derechos constitucionales, como el de la naturaleza al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y de las personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano, por tanto, el caso es objeto de una acción de protección. Al respecto es necesario mencionar que: “el juez debe examinar los soportes que presente el legitimado activo, como los aportados por el demandado, y en razón de ello resolver, es decir, determinar si la acción es procedente o no. De estas opiniones se infiere que el juez deberá respetar también los derechos que tiene el demandado. Y, desde el punto de vista procesal, ambas partes entran en igualdad de condiciones en la contienda, bajo ese antiguo principio que rige el procedimiento” (Sentencia No 040-10-SEP-CC de 9 de septiembre de 2010); bajo estos parámetros y en el caso sub judice, la pretensión de los accionantes, tiene cabida en el objeto que tiene la acción de protección, es decir, de garantizar el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial. Su reclamación es justa, por lo que amerita se tutelen sus derechos constitucionales, que han sido violentados por la parte accionada. Por lo anotado en los considerandos anteriores se determina que existe vulneración de derechos constitucionales y que los accionantes no tenían vías expeditas, siendo la vía constitucional la idónea para cesar la vulneración de sus derechos, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, SE ACEPTA la acción de protección propuesta por los señores Liliana Maribel Ramírez Sánchez, en representación de la comunidad “La Mesa”, la naturaleza y las generaciones futuras; Rosa Magaly Aguilar Ayala, en representación de quienes integran la comunidad “Portete”; Manuel Jesús Quizhpilema Paguay, en re-presentación del sujeto de derechos de la Naturaleza cerro “La Chuva” y el colectivo ecologista Yasunidos Piñas, en contra del GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS, representado por su Alcalde, el señor Jaime Wilson Granda Romero, el Dr. José Aguirre Murillo, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Municipal de Piñas; GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO, representado por su Prefecto, el señor Ing. Clemente Bravo Riofrío, el Abg. Francisco Moscoso Moscoso, en su calidad de Procurador Síndico del GAD. Provincial de El Oro, así también en contra de los particulares Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo. Por ajustarse a lo que dispone, el numerales 1, y 4 literal “c”, del artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, consecuentemente se DECLARA LA VULNERACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL de la naturaleza al respeto integral de su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, y el derecho de las COMUNIDADES “LA MESA” y “EL PORTETE”, Y DE LAS personas al buen vivir, al agua y al ambiente sano; Y TODAS LAS GARANTÍAS RELACIONADAS A ÉSTOS, COMO HA SIDO ABORDADO AMPLIAMENTE EN ESTA RESOLUCIÓN, contemplados en los artículos 71, 12, 14 Y CAP. II DERECHO DEL BUEN VIVIR, de la Constitución de la República del Ecuador, así también se DECLARA LA RESPONSABILIDAD DE LOS MENCIONADOS ACCIONADOS. SEXTO: REPARACIÓN INTEGRAL. Al respecto la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su parte pertinente señala: “En caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación.” (Art. 18), por lo que, en base al daño y violación de derechos constitucionales, y con la finalidad de reparar integralmente estos y por ende los pasivos ambientales y sociales, se dispone: REPARACIÓN MATERIAL E INMATERIAL.- Se ordena de forma inmediata la

reparación integral de los pasivos ambientales y sociales, de las áreas explotadas del cerro La Chuva, y de las Comunidades “La Chuva” y “El Portete”, que se han visto afectadas con estas actividades, con el objetivo de que en medida de lo posible, de que los derechos constitucionales vulnerados vuelvan a su estado anterior, o a su vez se aproximen a este para su disfrute; para lo cual se valorará sus efectos reales; disponiéndose la intervención del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente y Agua, quienes deberán diseñar y ejecutar el respectivo Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales a aplicarse en el caso concreto, además el Plan se ejecutará en asocio con los técnicos de los GAD. Municipal de Piñas y del GAD. Provincial de El Oro y sus especialistas de la rama, quienes deberán realizar un Informe inicial de todas las actividades a realizarse, y cada 6 meses deberán presentar Informes de cumplimiento, hasta que se materialice todo el proceso de reparación integral de los pasivos ambientales y sociales. Los gastos del mencionado Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales serán cubiertos de la siguiente forma: 40% por parte del GAD. Municipal de Piñas, 30% por parte del GAD. Provincial de El Oro, 15% por parte del señor Ángel Gerónimo Torres López, 15% por parte de los señores Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, es necesario señalar que en el caso de los Gobiernos autónomos descentralizados, deberán proyectar el gastos, para que se genere la respectiva partida presupuestaria, así también que el incumplimiento de uno de los obligados, no limitará a que el resto de los accionados cumpla con lo ordenado, so pena de ejercerse en su contra las respectivas acciones por incumplimiento, que contempla la norma procesal constitucional; para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. A efectos de dar seguimiento, y que se ejecute lo ordenado en el literal anterior, se manda a intervenir de forma permanente a la Defensoría del Pueblo Ecuador, Delegación de la Provincia de El Oro, y al Ministerio del Ambiente y Agua, quienes deberán presentar un Informe inicial y también Informes semestrales sobre el avance de la ejecución del Plan de reparación de los pasivos ambientales y sociales, hasta su culminación, para lo cual se realizará las respectivas comunicaciones. Como garantía de no repetición, y con la finalidad de evitar que se continúe con el daño, y vulneración de derechos constitucionales (explotación de recursos naturales, que se ha venido realizando por más de 80 años aproximadamente) se dispone suspender indefinidamente todo tipo de explotación y actividades mineras en el cerro “La Chuva”, para lo cual se oficiará al GAD. Municipal de Piñas, al Ministerio del Ambiente y Agua, al Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables del Ecuador, quienes se abstendrán de conceder concesiones en el lugar (cerro “La Chuva”). Se dispone que los accionados, cubran los gastos efectuados por los motivos de los hechos, los cuales se los fija en la suma de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA, que serán pagados de la siguiente forma: 40% por parte del GAD. Municipal de Piñas, 30% por parte del GAD. Provincial de El Oro, 15% por parte del señor Ángel Gerónimo Torres López, 15% por parte de los señores Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo. Como medida de reparación inmaterial se dispone denominar al Plan de reparación así: “PLAN DE REPARACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES Y SOCIALES CERRO “LA CHUVA” PIÑAS”, denominación que deberá utilizarse para referirse al plan en cualquier espacio, y en todo momento, por parte de autoridades públicas, privadas y la ciudadanía. Se dispone que los accionados, GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, Ángel Gerónimo Torres López, Jorge Fernando Peña Ochoa y Xavier Andrés Peña Olmedo, procedan a pedir disculpas públicas a los accionantes, en un acto solemne, y se informará a esta autoridad de su cumplimiento. Se dispone la publicación de la presente sentencia, en los sitios web oficiales de los GAD. Municipal de Piñas, GAD. Provincial de El Oro, Ministerio del Ambiente y Agua, y del Ministerio de Energías y Recursos Naturales no renovables, por el lapso mínimo de 90 días. Se deja constancia que la presente resolución no ha podido ser emitida, dentro de los plazos de ley, debido a que el juzgador tuvo que hacer uso obligatorio del segundo periodo de vacaciones,

así como también debido a la carga procesal que demanda una judicatura Multicompetente, además la necesidad de realizar una motivación de la sentencia, como lo exige la Corte Constitucional, y que de no haberse realizado la misma, implicaría una doble vulneración a los derechos constitucionales de los accionantes.- Téngase en cuenta que la parte accionada apeló oralmente la presente resolución, concediéndose dicho recurso, al tenor de lo que señala el Art. 76.7,m; de la CRE. por lo cual se remitirá de forma inmediata, el proceso al Superior, como lo contempla la norma procesal.- Así también se insiste a las partes procesales, procedan a realizar el pago de honorarios profesionales al Perito designado en la causa, de forma directa, como se lo dispuso en Audiencia.- Siga interviniendo el Secretario titular.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.-

f: RODRIGUEZ CORDOVA JONATHAN, JUEZ

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

LOJA TORRES WILMER ROLANDO
SECRETARIO